

NOMENCLATURA	: 1. [40] Sentencia
JUZGADO	: 20° Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL	: C-10462-2022
CARATULADO PUBLICO	: CARTES/FISCO DE CHILE/MINISTERIO

Santiago, veinticinco de Enero de dos mil veinticuatro

### VISTOS Y TENIENDO PRESENTE

**Al folio 1**, comparecen don Nicolás Alberto Leal Sepúlveda, y don Eduardo Armando García Ramos, abogados, en representación de don Segundo Omar Cartes Suazo, pensionado, doña Maaly Mercedes Espinoza Aguilera, dueña de casa y doña Claudia Ivana Cartes Espinoza, dueña de casa, todos con domicilio en calle Bandera, N°236 subterráneo, comuna y ciudad de Santiago, Región Metropolitana; quienes interponen demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual del Estado en contra del Fisco de Chile, representado legalmente en esta jurisdicción por don Juan Antonio Peribonío Poduje, abogado de la comuna de Santiago, todos con domicilio en calle Agustinas N°1687, comuna de Santiago o por quien le subroge o reemplace legalmente.

**Al folio 8**, consta la notificación al demandado.

**Al folio 10**, se contestó la demanda.

**Al folio 14**, se evacuó la réplica de la parte demandante.

**Al folio 17**, se evacuó la réplica de la parte demandada.

**Al folio 19**, se recibió la causa a prueba.

**Al folio 33**, se resolvió recurso de reposición contra la resolución que recibe la causa a prueba.

**Al folio 36**, el demandado presentó observaciones a la prueba.

**Al folio 40**, se citó a las partes a oír sentencia.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: MXTXLGRXKL

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que, el actor, asegura que el demandante principal se encuentra calificado como víctima en el listado de prisioneros políticos y torturados, elaborado por la Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, contemplada en la Ley N° 20405 publicada el 10 de diciembre de 2009 y creada por la presidenta Michelle Bachelet mediante el Decreto Supremo N° 43 publicado el 5 de febrero de 2010, conocida como Comisión Valech I con el número 4861 en dicho listado.

Detalla, que en cuanto a los demandantes por repercusión, doña Maaly Mercedes Espinoza Aguilera, es cónyuge del demandante principal en autos don Segundo Omar Cartes Suazo, y al mismo tiempo doña Claudia Ivana Cartes Espinoza es hija del demandante principal.

En cuanto al relato de los hechos, cita el testimonio de don Segundo Omar Cartes Suazo:

*“Mi nombre es Segundo Cartes Suazo, y en el año 1973 comencé a vivir un martirio. En aquel tiempo estaba casado, vivía junto a mi esposa en la ciudad de Chillán y trabajaba en la Ferretera Ñuble en la sección de despacho.*

*El 30 de octubre carabineros, militares y policías de investigaciones entraron a nuestra casa a la fuerza, hicieron destrozos, rompieron puertas y maltrataron a mi esposa. Me llevaron hacia Investigaciones propinándome golpes, culatazos y patadas. En el lugar me interrogaron y me sometieron a maltratos a mis 26 años, me mojaron y me pusieron corriente en los testículos y boca. Además, me dieron culatazos en mi espalda y cabeza.*

*Después, el 2 de noviembre me trasladaron al Regimiento, las condiciones del lugar eran pésimas, no podía ir al baño y tenía que dormir en el suelo. Allí fui nuevamente torturado con corriente por todo mi cuerpo, además de los incontables golpes. En el momento de la tortura estaba vendado.*

*Posteriormente me pasaron a la Cárcel de Chillán, me condujeron directo a la enfermería por las consecuencias de los malos tratos, incluso por un culatazo me provocaron un bulto en mi espalda. En la cárcel me torturaron psicológicamente,*



Foja: 1

*las amenazas y la presión eran horribles. Estuve hasta el 30 de mayo de 1974 ahí, luego me dejaron en libertad.*

*Desde mayo hasta el 31 de diciembre del mismo año estuve con firma semanal en el regimiento (control militar). Me amenazaron diciéndome que si salía a algún lugar me mataban, por ello, yo solo iba a trabajar, sin embargo, me seguían hasta ahí. Tuve que refugiarme en varios lugares por mi seguridad.*

*Las personas nos segregaban, mi hermana era esposa de un marino y ella no me quería ver por la detención, nunca volvimos a tener contacto. Nadie se quería acercar a nosotros.*

*Me vi obligado a salir del país, me fui a Argentina, primero viajé solo y después me siguió mi esposa. Mi estado físico y psicológico era deplorable, comencé a botar sangre por mi nariz y boca, fui al doctor y me dijo que era por los golpes, era bueno que botara todo lo malo que tenía mi cuerpo. Mi columna, riñones y testículos quedaron afectados por las torturas que recibí.*

*Los primeros años después de mi detención sufrí de insomnio, pesadillas y una constante ansiedad, estaba siempre en alerta y sobresaltado, sentía mucho miedo.*

*Retorné a Chile a fines del año 1981, mi vida en Argentina fue buena, estuve con médicos que me trataron correctamente.*

*En Chile me seguí tratando con psicólogo y psiquiatra. Con el tiempo mi columna se agravó severamente, tengo una pensión de invalidez debido a ello.*

*Hace aproximadamente tres años sufrí un accidente cerebro vascular, tengo fuertes dolores de cabeza, me trato con neurólogo y tomo medicamentos.*

*El insomnio me persigue hasta la actualidad tengo que tomar clonazepam para conciliar el sueño. Con mi esposa, Maaly, intentamos sobrellevar lo sucedido, vamos a la iglesia evangélica. Ella y yo llevamos un gran dolor y tristeza en nuestro interior que jamás vamos a olvidar, vivimos una inmensa injusticia”.*

Además, cita el testimonio de doña Maaly Mercedes Espinoza Aguilera:

*“La vida de mi marido, Segundo Omar Cartes Suazo, y la mía fueron destruidas el 30 de octubre de 1973. Militares, carabineros y policías de investigaciones irrumpieron en nuestro hogar, ubicado en la ciudad de Chillán, como a las 6:45 de la mañana, nosotros estábamos acostados en ese momento. Ellos destruyeron*



Foja: 1

*puertas, camas y todo lo que veían. A mi marido lo tenían apuntado con armas como si fuera un delincuente, yo lo tuve que vestir mientras me empujaban y forcejeaban. Me dijeron "tu saco de pera te lo vamos a tener en investigaciones".*

*A las ocho de la mañana estaba en Investigaciones buscando a mi marido. En vez de decirme dónde se encontraba me comenzaron a interrogar sobre armas, yo les dije que el arma que yo poseo es la biblia. Me torturaron cruelmente, yo estaba vendada, me aplicaron corriente en mis senos y vagina, recibí golpes e incluso me amenazaron con fusilarme, yo solo tenía 23 años. Recuerdo el nombre de quienes me torturaron, que también estuvieron involucrados en el daño que le hicieron a Segundo, era un carabinero de apellido Márquez Riquelme, el Negro Opazo, los hermanos Alarcón y el teniente Morales.*

*Me retuvieron en Investigaciones hasta el día en que mi marido fue trasladado al Regimiento. Me fui del lugar hacia allá caminando en mal estado. Presenció la llegada de Segundo, salí corriendo sin pensar por el miedo que sentía, no fui capaz de acercarme más.*

*El 3 de noviembre lo llevaron a la Cárcel de Chillán, yo lo visitaba todos los días para ver si estaba vivo, sabía que lo torturaban con corriente, lo golpeaban sin parar, recibía culatazos en todo el cuerpo, entre otras cosas. Mi marido era atormentado física y psicológicamente, yo deseaba con todas mis fuerzas que él volviera a casa.*

*Finalmente, Segundo fue liberado el 30 de mayo de 1974 bajo control militar.*

*Posterior a la libertad de mi marido nos perseguían constantemente y vigilaban nuestra casa, tuvimos que refugiarnos en distintos lugares, temíamos por nuestras vidas. Tuvimos que irnos para Argentina, Segundo emprendió en viaje primero, luego lo seguí yo. Él quedó totalmente mal por la detención, no podía dormir por las noches, tenía pesadillas y siempre estaba muy asustado.*

*Con el pasar de los años nos volvimos a Chile, primero retorne sola, mi marido permaneció en Argentina para seguir trabajando y enviarnos dinero. Él volvió alrededor del año 1981 al país.*

*A pesar del tiempo persisten las secuelas en nosotros, yo no he podido olvidar lo sucedido, por mucho tiempo sufrí de pesadillas, ansiedad e insomnio. En mi cuerpo quedaron marcas de color azul por la aplicación de corriente. Nos costó años poder dormir tranquilos siquiera una noche.*



Foja: 1

*Hasta el día de hoy estoy constantemente preocupada de mi marido, él llora y recuerda lo ocurrido, revive esos momentos tan crueles, sé que está mal psicológicamente. Nosotros nunca vamos a olvidar algo tan traumático, llevamos un gran dolor en nuestros corazones”.*

Por último, cita el testimonio de doña Claudia Ivana Cartes Espinoza:

*“Mi padre, Segundo Omar Cartes Suazo, fue detenido en el año 1973. Me enteré de lo sucedido a mis 26 años, sólo porque lo ayudé a realizar un trámite para su pensión VALECH, él ha sido reservado con el tema, pues es algo que lo marcó de por vida.*

*Todo comenzó el 30 de octubre de 1973, a mi padre lo detuvieron en su casa, ubicada en la ciudad de Chillán, en aquel entonces mis padres estaban casados, pero yo aún no nacía.*

*El primero fue llevado a Investigaciones, luego lo pasaron al Regimiento. En este lugar sufrió de crueles tratos y torturas, lo metieron a un hoyo con muchos vidrios, había botellas rotas, ahí, mi padre quedó con heridas en su espalda, piernas y brazos.*

*En el Regimiento era donde lo torturaban cruelmente, le ponían corriente en los testículos y le propinaban golpizas. En una ocasión lo sacaron hacia un puente, lo amarraron de pies y manos y lo colgaron vendado. Él sentía como soltaban a las personas que estaban alrededor y caían al agua. Gracias a Dios no soltaron a mi padre.*

*Posteriormente, el 3 de noviembre fue trasladado a la Cárcel de Chillán. Él estaba mal física y psicológicamente, cuando escuchaba el sonido del portón de la Cárcel se le aceleraba el corazón, porque sabía que venían a buscar a algún preso para ir a torturarlo al Regimiento. Muchos se orinaban cuando abrían el portón.*

*Mi padre estuvo hasta el 30 de mayo de 1974 privado de su libertad. Cuando salió sufrió de hostigamiento, vigilancia y discriminación. Además, lo despidieron de su trabajo en la Ferretera Ñuble. A mis padres los trataron peor que reales delincuentes.*

*Se tuvieron que ir para Argentina. Mi padre no podía dormir, saltaba toda la noche, tenía insomnio y pesadillas. Yo nací en ese país, permanecí durante mi infancia allá y después tuve que volver a Chile porque mi abuela se enfermó.*



Foja: 1

*Me di cuenta, a medida que fui creciendo, que mi padre era un hombre muy nervioso y que siempre estaba preocupado. Él fumaba alrededor de tres cajetillas diarias, sin embargo, con el tiempo lo dejó.*

*Por todo lo que vivió tuvo que tratarse con doctores, psicólogo y psiquiatra. Estuvo con un grave problema en la próstata por la tortura con electricidad, esto fue muy complejo.*

*Cuando me enteré a mis 26 años de todo esto lloré, sentí muchas cosas, me causo tanto dolor, yo no podía creer lo que le había pasado, me enoje porque no me había contado, pero él me dijo que no quería causarme daño.*

*Los primeros días no podía dormir, se me venían a mí los recuerdos de lo que mi padre vivió, sentía una tristeza enorme, que siempre llevaré conmigo. Creo que nadie debería haber pasado por algo así, mucha gente murió, doy gracias que mi padre esté con vida. Él tiene que estar en tratamiento y tomar pastillas para poder dormir, sé que está afectado, y eso nunca se va a remediar, mi padre hasta su último día estará con ese dolor dentro. No entiendo como existe tanta crueldad, o cómo pueden vivir los torturadores después de todo el daño y vidas que arruinaron, siento una inmensa impotencia por lo sucedido”.*

La parte demandante afirma, que los antecedentes previamente consignados forman parte del catálogo de crímenes reconocidos en la comunidad internacional como de lesa humanidad, según lo establecido en el Estatuto del Tribunal Militar de Nüremberg de 1945.

Hace presente, que el artículo 38, inc. 2º, de la Constitución Política de la República señala que cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por el Estado podrá reclamar ante los tribunales de justicia. Afirma, que este precepto consagra una verdadera acción constitucional para hacer efectiva la responsabilidad de los organismos del Estado, cuando estos por su actividad provoquen un daño a una persona, ya sea natural o jurídica.

Sostiene, que el fundamento básico de esta responsabilidad legal o extracontractual del Estado está contenido en diversas disposiciones de rango constitucional, supraconstitucional y también legal, y todas ellas - cuando menos- son normas propias del ámbito del derecho público.



Foja: 1

Se remite al Capítulo I de la Constitución Política de la República sobre las Bases de la Institucionalidad. Indica, que allí el constituyente desarrolla los principios basales desde donde se estructura todo el sistema institucional. Así, el artículo que da inicio a nuestra Carta Primera en su inciso 4º prescribe que *“El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común”*. En concordancia con lo anterior, el artículo 5º reafirma -en su inciso 2º- que *“El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”*. Comenta, que la conjunción de ambos preceptos resume la doctrina completa del constitucionalismo, o sea, del poder limitado por el derecho, para servir a la persona sobre la base de los principios que caracterizan a la civilización centrado en los valores de la dignidad y los derechos inalienables del ser humano. (Cfr. Cea, José Luís. Derecho Constitucional Chileno. Tomo I. Ediciones Universidad Católica de Chile. 2002. Pág. 210).

Asegura, que de este modo, las disposiciones reseñadas en conjunto con los artículo 6º y 7º de la Constitución, que a su vez establecen los principios de la primacía constitucional y de juridicidad, respectivamente, conforman el denominado estatuto de la responsabilidad extracontractual del Estado; responsabilidad que emana de la naturaleza misma del ente estatal como persona jurídica compleja creada para la realización del bien común.

Comenta, que este conjunto de normas y principios no han hecho sino reconocer aquello que a nivel internacional se ha venido desarrollando por más de un siglo. Expresa, que concepciones tales como bien común, la superioridad ontológica de la persona frente al Estado o la dignidad humana como límite a la soberanía estatal, formaban ya parte integrante del corpus iuris internacional conformado por el derecho internacional humanitario así como del Derecho Internacional de los Derechos Humanos del cual el Estado de Chile forma parte.

Señala, que el Estado de Chile mediante la suscripción de declaraciones y convenciones a nivel internacional, así como concurriendo con su voto en la aprobación de múltiples resoluciones por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos, o bien mediante la vigencia de la costumbre internacional y los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas, ha ido adquiriendo de forma progresiva una serie de obligaciones que responden a la obligación general de



Foja: 1

*“respeto de los derecho esenciales del hombre”* por parte de los Estados. Tal obligación se desprende del preámbulo y, entre otros, de los artículos 3.K, 16, 17, 32, 44, 45, 46 y 136 de la Carta de la Organización de los Estado Americanos, en concordancia con los preceptos de la Carta de las Naciones Unidas, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Advierte, que el desarrollo de este complejo normativo conocido como Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ciertamente ha importado un cambio significativo en la configuración de la responsabilidad estatal. En concreto, en materia de derechos humanos, los Estados tienen una obligación de resultado, cual es, la efectiva vigencia de los derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales.

Afirma, que la responsabilidad del Estado por violación a los derechos humanos es una cuestión objetiva, toda vez que el ilícito por violaciones a los derechos fundamentales se produce en el momento en que el Estado actúa en violación de una norma obligatoria, sin necesidad de que exista falta o culpa por parte del agente. Reitera, que se trata en consecuencia de una responsabilidad objetiva en donde no interesa la presencia de dolo o culpa en el accionar dañoso del Estado. Detalla, que la responsabilidad internacional del Estado nace al momento en que con su actuar se infringen los límites que le señalan los derechos humanos como atributos inherentes a la dignidad de las personas, sin necesidad de que exista falta o culpa por parte del autor material del acto. Indica, que confirma normativamente esta interpretación, el encabezado del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Agrega, que el artículo 19, N° 20 de la Carta Fundamental indica que *“la Constitución asegura a todas las personas la igual repartición de las cargas públicas”*. Aquí se consagra la idea básica, según la cual nadie está obligado a soportar una carga que no haya sido establecida por la ley, ni aun en pro del bien común, como lo establece la jurisprudencia de la Corte Suprema.

Señala, que la correcta resolución del caso sub lite requiere la aplicación armónica de la Constitución Política, de los tratados internacionales sobre derechos humanos y de la Ley de Bases de la Administración del Estado. A contrario sensu, en este conflicto son improcedentes las reglas propias del derecho de daños contenidas en el Código Civil, toda vez que dicho estatuto se construye sobre premisas y principios diferentes a los del derecho público y al Derecho





Foja: 1

Internacional de los Derechos Humanos, constituyendo un error de lógica y sistemática jurídica la aplicación de normas de derecho privado a las situaciones en que se persigue la responsabilidad del Estado por actos dañosos, ya que ambos difieren en su naturaleza y fines, destinado a otras conductas e intereses.

Argumenta, que la diferencia entre uno y otro sistema de responsabilidad es evidente.

Cita, un conjunto de razones de texto que llevan a sostener porqué el derecho de daños del Código Civil chileno es insuficiente para resolver conflictos que versan sobre violaciones a los derechos fundamentales de la persona humana. Tales razones son las siguientes:

1.- Este caso no se trata de la búsqueda de una reparación para un delito común. Expresa, que el Título XXXV del Libro IV del Código Civil no es la norma que tiene que juzgar aquellos actos en donde los hechos que se ventilan dicen relación directa con una práctica sistemática y masiva por parte del Estado, destinada a exterminar a un número importante de la población nacional sólo en razón de sus creencias e ideologías políticas. Por lo tanto, para no desnaturalizar el tenor literal del artículo 2314 del Código Civil uno tendrá que reconocer que dicha norma fue diseñada para resolver ilícitos comunes y, por lo mismo, ante un caso como éste –“secuestro calificado”- el derecho aplicable debe hallarse más bien en el ámbito constitucional, administrativo e internacional

2.- Las normas del Título XXXV del Libro IV del Código de Bello fueron dictadas en un contexto en donde los mayores riesgos, peligros y daños parecían venir del comportamiento de personas ebrias (Art.2318); de adolescentes con mala educación y hábitos viciosos (Art.2321); edificios en ruinas (Art.2323); o bien, de animales sueltos, extraviados y fieros (Art.2326 y Art. 2327). Comenta, que la regla del artículo 2322 -sobre la relación entre amos y criados- es del todo insuficiente a la hora de resolver la dinámica que se produce al interior de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, cuando han cometido crímenes de lesa humanidad, más aún es contraria al derecho internacional pues permite la exculpación estatal ante tan horrendos crímenes.

Por otro lado, advierte, que la materia de que trata la presente causa quede gobernada bajo normas de carácter público e internacional -por sobre las meramente privadas- implica reconocer la autonomía y orgánica particularidad del complejo normativo de los derechos humanos, de modo tal que no solo cabe afirmar el carácter objetivo de la responsabilidad del Estado sino además la



Foja: 1

imprescriptibilidad de las acciones patrimoniales derivadas de las violaciones a los derechos humanos.

En efecto, en toda sociedad democrática y respetuosa de la libertades de cada individuo, los ataques y los daños causados por parte de los agentes del Estado en contra de la vida, integridad física o la libertad ambulatoria de una persona –derechos que, por lo demás, se hallan protegidos por los artículos 4, 5 y 7 de la Convención Americana de sobre Derechos Humanos y por los N° 1 y 7 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental- constituyen un tipo específico de violación que deja al infractor en el deber de responder ante la comunidad internacional y a la víctima en situación de ser legítimamente reparada.

Añade, que la Convención Americana, señala con claridad la existencia del deber de reparar que se le impone a todo Estado que haya sido responsable de violar alguno de los derechos fundamentales de la persona humana que se encuentren garantizados por dicha Convención. Reconoce, que si bien por un lado es efectivo que en ninguna disposición de la Convención Americana se señala de modo expreso la imprescriptibilidad de las acciones civiles, por otra parte la ausencia de regulación jurídica expresa, le impone al juez la tarea de interpretar, o más bien, integrar la normativa existente con los correspondientes principios generales del Derecho que, en el caso concreto, orientan al Derecho Administrativo y en especial al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Señala, que así se encuentra establecido en el artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia, al disponer que: *“La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar: [...] c) los principios generales del Derecho reconocido por las naciones civilizadas”*. [Tales] principios generales del Derecho [...] reconocen la imprescriptibilidad de las acciones reparatorias derivadas de violaciones a los derechos humanos. (Cfr. E. Corte Suprema, 14.10.2009, “López con Fisco de Chile”, Rol N° 5570-2007, voto disidente del Ministro Sr. Sergio Muñoz Gajardo. Considerando N° 18).

Añade, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos – haciendo suyo el razonamiento fijado por la Corte de La Haya desde los albores del Siglo XX– ha establecido que: *“es un principio de Derecho Internacional, que la jurisprudencia a considerado “incluso una concepción general del derecho”, que toda violación a una obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente. La indemnización, por su parte, constituye la forma más usual de hacerlo (...) la reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional consiste en la plena restitución (restitutio in integrum),*



Foja: 1

*lo que incluye el restablecimiento de la situación anterior y la reparación de las consecuencias que la infracción produjo y el pago de una indemnización como compensación por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales incluyendo el daño moral*". (Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Velásquez Rodríguez. Indemnización compensatoria. [Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos]. Sentencia de 21 de julio de 1989. Serie C, N° 7. Párr. 25-26).

Por lo anterior, resulta imposible abstraerse del hecho de que toda violación a un derecho humano al interior del sistema interamericano, trae aparejada la obligación de reparar el mal causado. En esta materia la norma rectora es el Art. 63 del Pacto de San José. (Cfr. I. Corte de Apelaciones de Santiago, 18.01.06, "Marfull González con Pinochet Ugarte", Rol N° 37.483-2004, Considerando N°18.)

Indica, que en Chile –dada su calidad de Estado miembro del sistema interamericano- la lógica que debiera operar en casos de violaciones de derecho humanos de alguna persona tendría que ser la misma: reparar íntegramente el mal causado. Obligación ésta del Estado que queda sujeta al constructo normativo de los derechos humanos y a sus principios formativos, a saber: el principio pro homine, entendiendo por tal la interpretación de sus preceptos en el sentido más favorable a la persona; el principio de progresividad de sus normas abiertas a una evolución conceptual; y el principio de la congruencia de aquellas, entre otros. (Cfr. Nikken, P. "El concepto de derechos humanos", en Estudios Básicos de Derechos Humanos, I.I.D.H., Costa Rica, 1994. pp. 15-17).

Hace presente, que nuestro país ha concurrido bajo el amparo del tratado marco de la Carta de las Naciones Unidas de 1948, conforme a la información oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, obligándose por tratados internacionales de ejecución, los cuales ha suscrito en la modalidad de declaraciones y resoluciones por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas entre las cuales vale destacar la resolución A/RES/60/147, de 24 de octubre de 2005, los *"Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones"*, que en su Principio II delimita el objeto de la obligación del Estado en materia de vulneración de derechos fundamentales al establecer: *"[...] La obligación de respetar, asegurar que se respeten y aplicar las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario según lo previsto en los respectivos ordenamientos jurídicos comprende, entre otros, el deber de: a) Adoptar disposiciones legislativas*



Foja: 1

*y administrativas y otras medidas apropiadas para impedir las violaciones; b) Investigar las violaciones de forma eficaz, rápida, completa e imparcial y, en su caso, adoptar medidas contra los presuntos responsables de conformidad con el derecho interno e internacional; c) Dar a quienes afirman ser víctimas de una violación de sus derechos humanos o del derecho humanitario un acceso equitativo y efectivo a la justicia, como se describe más adelante, con independencia de quién resulte ser en definitiva el responsable de la violación; y, d) Proporcionar a las víctimas recursos eficaces, incluso reparación, como se describe más adelante”.*

Comenta, que la idea de reparación se trata de una obligación compleja e indisoluble constituida por el deber de investigar los hechos, la obligación de sancionar a los responsables y la obligación de reparar adecuadamente a las víctimas. Esta última obligación tiene que ser tratada como un deber imprescriptible en virtud del Principio IV de dicho cuerpo legal según el cual: “[...] *Cuando así se disponga en un tratado aplicable o forme parte de otras obligaciones jurídicas internacionales, no prescribirán las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos ni las violaciones graves del derecho internacional humanitario que constituyan crímenes en virtud del derecho internacional”.*

Comenta, que la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, en su 61º Periodo de Sesiones, aprobó el año 2005 el “*Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad*”. Allí se lee –en el Principio 23 sobre restricciones a la prescripción- que: “*La prescripción no se aplicará a los delitos graves conforme el derecho internacional que sean por naturaleza imprescriptibles. Cuando se aplica, la prescripción no podrá invocarse en las acciones civiles o administrativas entabladas por las víctimas para obtener reparación.*”

Argumenta, que el fundamento en virtud del cual un Estado queda obligado a la ejecución de una reparación determinada frente a una persona que haya sido víctima de violaciones a sus derechos fundamentales mediante ilícitos que la conciencia jurídica universal considera intolerables, se rige por normas y principios del derecho público e internacional de los derechos humanos logrando sujetar dentro de sus esferas, por vía de la progresividad normativa, un sistema de responsabilidad autónomo que se conforma transversalmente desde los primeros acuerdos interestatales sobre el jus in bello.



Foja: 1

Destaca, que así lo han entendido los Tribunales Superiores nacionales y es en ese sentido que la más reciente jurisprudencia de la E. Corte Suprema le ha otorgado el carácter de imprescriptibles a las acciones civiles que derivan de los crímenes de lesa humanidad atentatorios contra los derechos humanos declarando que: “[...] conforme se ha señalado en el presente veredicto, en autos se está en presencia de lo que la conciencia jurídica denomina delitos de “lesa humanidad”, calificación que no sólo trae aparejada la imposibilidad de amnistiar el ilícito, declarar la prescripción de la acción penal que de él emana, sino que además, la inviabilidad de proclamar la extinción – por el transcurso del tiempo – de la posibilidad de ejercer la acción civil indemnizatoria derivada del delito que se ha tenido por acreditado”. (Cfr. E. Corte Suprema 21.01.2009, “Episodio Tormen”, Rol N° 3907-2007, Considerando N° 30).

Afirma, que para la determinación de la procedencia de la responsabilidad del Estado no es necesaria la acreditación del elemento subjetivo (dolo, o culpa), puesto que dichos elementos no pueden encontrarse en una persona sin sentimientos, como lo es el Estado o su administración (persona jurídica). Asegura, que para determinar entonces la procedencia de la responsabilidad estatal, el agraviado debe probar únicamente la existencia de daño o perjuicio provocado; y la actividad (o inactividad) del órgano del estado que lo genera, y desde luego la relación de causalidad.

Respecto a la existencia del daño o lesión, expresa, que don Enrique Barros Bourie, ha señalado que “*basta la lesión de un interés legítimo y relevante de la víctima para que se entienda que ha sufrido un daño reparable*”.

Destaca, que actualmente nadie podría negar la procedencia del daño moral en el marco de la responsabilidad, encontrándose aquella incluso su fundamento en nuestra propia Carta Fundamental. Precisa, que el aporte más relevante del texto Constitucional a la teoría de la resarcibilidad del daño moral ha sido la consagración como derechos fundamentales de las personas y merecedores de tutela jurisdiccional derechos no económicos como la vida, la integridad psíquica y física, la vida privada, la honra de la persona y su familia. La tesis de la “constitucionalización del Derecho Civil”, ha abonado la postura de que “*el daño moral debe ser indemnizado incluso con mayores razones constitucionales que el daño meramente patrimonial*” Así lo indica doña Carmen Dominguez Hidalgo, que los tribunales, en virtud del principio de legalidad establecido en el art. 6 de la Constitución, deben brindar una protección adecuada a estos derechos, concediendo la reparación integral de los daños causados. Al no excluir la



Foja: 1

Constitución el daño moral (salvo en el supuesto de expropiación: art. 19 N° 24), la reparación puede comprender sin problema dicho daño.

En cuanto a la causalidad, asegura, que esta se encuentra acreditada. Hace presente que el mismo demandado, ha reconocido la calidad de torturado del demandante, el que aparece en el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (llamado coloquialmente Informe Valech I) con el número de identificación 4861.

Respecto al daño provocado y el monto de la indemnización, afirma, que en este caso existe un daño de carácter moral que se expresa en dolor, sufrimiento, angustia, sensación de pérdida, rabia e impotencia ante la situación extremadamente violenta, injusta e ilegítima que vivió en carne propia. Esto es indudablemente un daño moral, el cual, según la dogmática jurídica y la jurisprudencia nacional e internacional, amerita ser reparado a través de una indemnización.

Señala, que aquí entenderemos por daño moral aquella específica clase de menoscabo que afecta a los atributos y facultades morales o espirituales de una persona, esto es un dolor, un pesar, una angustia, molestias psíquicas que sufre una persona en sus sentimientos a consecuencia del hecho ilícito y, en general, toda clase de sufrimiento moral o físico. Esta forma de conceptualizar el daño moral es consistente con los sentidos dados por la doctrina chilena y la jurisprudencia (nacional e internacional).

Hace presente, que don Arturo Alessandri quien, en su momento, definió el daño moral como *“el dolor, pesar o molestia que sufre una persona en su sensibilidad física, en sus sentimientos o afectos o en su calidad de vida”*. Añade, que el mismo autor sostiene que el daño moral se identifica con la expresión *“el precio del dolor”*. Indica, que según este catedrático el carácter indemnizable del daño moral no cumple sólo una función reparatoria, (ya que daños como los que han sufrido son invaluable, irreparables) sino también compensatoria, ya que la indemnización del daño moral pretende hacer de nuevo la vida más liviana a quien ha soportado una dura carga, y utiliza para ello la expresión *“las penas con pan, son menos”*. Agrega, que la doctrina más moderna ha expandido el concepto de daño moral a *“una lesión de cualquier interés cierto y legítimo de la víctima de contenido no patrimonial”*. Menciona, que don Enrique Barros Bourie sobre la base de la jurisprudencia nacional, ha conceptualizado el daño moral como el dolor físico, la angustia psicológica o la pérdida de oportunidades para disfrutar una buena vida. Así, la categoría de daño corporal, expresa adecuadamente la



Foja: 1

protección de los importantes e inapreciables bienes de la vida humana y de la integridad física y psíquica de la persona.

Señala, que las sentencias dictadas por los Tribunales Superiores de justicia tienden a definir el daño moral como *“aquél que lesiona un derecho extramatrimonial de la víctima”*, junto con afirmar que *“es la lesión o agravio, efectuado dolosa o culpablemente, de un derecho subjetivo de carácter inmaterial o inherente a la persona y que es imputable a otro hombre”* (I. Corte de Apelaciones de Santiago, 13 de marzo de 1985, RDJ, Tomo LXXXII, sec. 2, página 6). En la misma dirección corren también aquellas sentencias que definen el daño moral como un conjunto de *“atentados a derechos personalísimos del ser humano que no tienen un contenido económico”* (I. Corte de Apelaciones de Santiago, 1 de Julio de 1997, RDJ, Tomo XCIV, sec. 2, página 79). Ahora bien, respecto de la prueba del referido daño moral en sede judicial, tanto la doctrina como la jurisprudencia mayoritaria coinciden en señalar que el daño moral no requiere ser probado en juicio, en tanto se tenga por acreditado el hecho ilícito que lo ha generado.

En cuanto al derecho internacional, afirma, que ya es jurisprudencia constante y pacífica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la idea de que el daño moral no requiere prueba en sede jurisdiccional. De hecho, en las sentencias dictadas por esta Corte, se constata que una víctima de violaciones graves a sus derechos humanos -tales como, las afectaciones a su derecho a la vida, o a la integridad personal o la libertad ambulatoria- no tiene que asumir como carga procesal la tarea de probar el daño moral que refiere haber sufrido, toda vez que (dicho padecimiento) *“resulta evidente, pues es propio de la naturaleza humana que toda persona sometida a tortura, agresiones y vejámenes (...) experimente dolores corporales y un profundo sufrimiento”* (Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Caso Moiwana”. Reparaciones. Sentencia de 15 de junio de 2002. Serie C N°124). Asegura, que como víctima directa y reconocida de tortura mediante un informe oficial, debiese presumirse el daño moral.

Hace presente, la complejidad que conlleva solicitar un determinado monto a fin que haga las veces de reparación integral del mal causado, porque es un daño verdaderamente irreparable el que como imaginará destruyó la vida, tanto personal, en lo íntimo en cuanto a sueños y esperanzas, así como en el dolor tanto físico, pero más importante psicológico, respecto del cual comenta, que no tiene forma alguna de ser revertido.



Foja: 1

No obstante lo anterior, propone el monto de \$200.000.000 (doscientos millones de pesos) para el demandante principal, y el monto de \$100.000.000 (cien millones de pesos) para cada demandante por repercusión o rebote, cifra que se basa tanto en la jurisprudencia actual, como en la magnitud del daño causado.

Previa invocación de disposiciones, jurisprudencia y doctrina que estima pertinente, solicita tener por interpuesta demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual del Estado en contra del Fisco de Chile, acogerla a tramitación y, en definitiva, condenar a la demandada al pago de la suma de \$200.000.000 (doscientos millones de pesos) a don Segundo Omar Cartes Suazo, y además la suma de \$100.000.000 doña Maaly Mercedes Espinoza Aguilera y doña Claudia Ivana Cartes Espinoza por concepto de daño moral, o a la suma que el Tribunal determine conforme a derecho, cantidad que deberá ser reajustada de acuerdo a la variación del IPC, desde la fecha de interposición de esta demanda y el pago efectivo de la indemnización que en definitiva se establezca, junto con los intereses legales correspondientes durante el mismo período y además las costas de la causa.

**SEGUNDO:** Que, en su contestación, la demandada opone en primer lugar excepción de cosa juzgada respecto del demandante Segundo Omar Cartes Suazo.

Argumenta, que existe sentencia definitiva ejecutoriada en la materia, respecto del demandante.

Indica, que el demandante ya ejerció una acción por estos mismos hechos, habiéndose dictado sentencia ejecutoriada. Detalla, que don Segundo Cartes Suazo, ya demandó al Fisco por indemnización de perjuicios por la detención ilegal y apremios que habría sufrido, en la causa caratulada "Salgado Salgado y Otros con Fisco de Chile", del 14º Juzgado Civil de Santiago; Rol: C-1890-2006; dictándose en esos autos, sentencia definitiva que rechazó la demanda por acoger la excepción de prescripción de la acción de indemnización de perjuicios, la cual fue confirmada por la I. Corte de apelaciones de Santiago y rechazada la casación en el fondo deducida en su contra, encontrándose firme y ejecutoriada.

Expresa, que todo ello se acredita con la respectiva copia de la demanda en que el demandante aparece individualizado y con su número de Rut, con las copias de las sentencias en que consta el ejercicio de la misma acción y que fueron obtenidas desde el portal digital del Poder Judicial, concurriendo de esta forma los requisitos que hacen procedente la excepción de la cosa juzgada.





Foja: 1

Añade, que el demandante ya ejerció esta acción y obtuvo sentencia desfavorable a sus intereses, que hizo lugar a la excepción de prescripción de la acción.

Hace presente, que concurren las mismas partes, causa de pedir y objeto pedido, ya que el señalado actor demandó al Fisco de Chile por la supuesta responsabilidad extracontractual imprescriptible y objetiva de éste, por los apremios ilegítimos o torturas que habría sufrido en manos de agentes del Estado.

Reitera, que en el juicio antes mencionado, se dictó sentencia de término ejecutoriada.

Argumenta, que la cosa juzgada constituye la expresión máxima de la preclusión, o sea, el cierre definitivo de la etapa que resuelve de una vez y para siempre el conflicto, erigiéndose pues en el objeto final del procedimiento.

Expone, que se entiende por autoridad de cosa juzgada aquella calidad o atributo propio del fallo que emana de un órgano jurisdiccional cuando ha adquirido carácter de definitivo, es decir, “el imperium” o la posibilidad de ejecutar lo fallado.

En cuanto a la eficacia de cosa juzgada, indica que esta opera como medida de complemento de la autoridad de cosa juzgada, y que esta medida se traduce en tres posibilidades:

1.- Inimpugnabilidad: Se refiere a que la sentencia que produce cosa juzgada no puede ser revisada por ningún juez cuando se hayan agotado ya todos los recursos que prevea la ley. Es inexpugnable, la ley no acepta ningún ataque ulterior tendiente a obtener la revisión de la misma materia. Constituyendo en definitiva la consagración del principio del “non bis in ídem”.

2.- Inmutabilidad: Consiste en que la sentencia no es atacable indirectamente, por no ser posible abrir un nuevo proceso sobre el mismo tema; no puede otra autoridad modificar los términos de una sentencia pasada. Es decir, en ningún caso otra autoridad, de oficio o a petición de parte, podrá modificar los términos de una sentencia pasada en cosa juzgada.

3.- Coercibilidad: Consiste en la posibilidad de ejecución forzada en los casos de sentencia de condena. La cosa juzgada es susceptible de ejecución, de manera que cuando la resolución adquiere ejecutoriedad, se puede solicitar que el juez ejecute la sentencia de manera amistosa o forzada.

En lo que dice relación con el límite objetivo de la cosa juzgada, precisa que tendremos que atender al objeto de la decisión y su causa de pedir, es decir, la



Foja: 1

determinación estricta de la “res in iudicium deductae”. Añade, que se configura de este modo, la idea tradicionalmente aceptada por la doctrina, jurisprudencia y recogida por nuestra legislación de la triple identidad que debe existir para que la cosa juzgada pueda hacerse valer como excepción, a saber, identidad legal de persona, cosa y causa.

Expresa, que se da la triple identidad requerida en cuanto:

A) Hay identidad legal de personas: pues son el actor individualizado, demandantes civiles en ambos procesos; siendo además el Fisco de Chile el demandado en dichos juicios, por lo cual coinciden tanto la identidad física como legal-procesal de ambas partes.

B) En cuanto a la identidad legal de cosa pedida: siendo la indemnización por daño moral por responsabilidad civil extracontractual objetiva e imprescriptible del Fisco de Chile, lo demandado en estos procesos.

C) En lo referente a la causa de pedir: Son la misma detención ilegal, prisión política y torturas que habría sufrido en manos de agentes del Estado.

Advierte, que la Excma. Corte Suprema en fallo rol N° 20.520-2018 de fecha 14 de noviembre de 2019, establece la procedencia de la cosa juzgada en causas de derechos humanos, y su independencia con lo resuelto por tribunales internacionales. En el mismo sentido, señala los fallos de la Excma. Corte Suprema rol N° 44.407 de fecha 9 de noviembre de 2020 y rol N° 333.444-2020 de fecha 13 de agosto de 2021.

Afirma, que como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte, el efecto de cosa juzgada de los fallos ejecutoriados prevalecen como un valor fundamental de nuestro ordenamiento jurídico y no puede dejar de aplicarse ni aún a pretexto de supuesta imposibilidad conforme al derecho internacional.

Asimismo, respecto del artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sostiene que no impide la aplicación del derecho interno nacional ni de la institución de la prescripción en Chile. Detalla, que el mandato contenido en esa disposición está dirigido a la Corte Interamericana y no a nuestros Tribunales, quienes deben aplicar la normativa de derecho interno que rige la materia, siendo totalmente improcedente invocarlo para restar aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, esto es, la excepción de cosa juzgada.



Foja: 1

Reconoce, que la Corte Suprema en algunas sentencias recientes ha sostenido que, sobre la base de un control de convencionalidad, debe dejar de aplicarse la normativa interna desconociendo la cosa juzgada por la existencia de una norma que exigiría la reparación. Así por ejemplo lo ha sostenido en la sentencia Rol N° 104.558-2020 cuando anota que *“al aplicar el control de convencionalidad, sin ningún género de dudas, se constata la irrelevancia de cualquier excepción de cosa juzgada”* (argumentaciones similares en los Roles N° 36319-19 y N° 144348-22).

Sostiene, que no pueden simplemente inaplicarse las reglas de derecho interno que regulan la cosa juzgada porque esta es una institución que, también para el derecho internacional, ocupa un lugar central. No se trata entonces, sobre la base de un discutible control de convencionalidad que tendría el efecto de inaplicar normas, de decidir que la cosa juzgada regulada en el derecho interno debe ser olvidada para proteger normas del derecho internacional. La fórmula de compatibilizar ambos ordenamientos es comprendiendo que también el derecho internacional reconoce, valora y protege la cosa juzgada.

Afirma, que la cosa juzgada es una institución antigua y reconocida en el derecho nacional e internacional. La Corte Internacional de Justicia la tiene consagrada entre aquellos principios generales de derecho reconocido por las naciones civilizadas. Agrega, que otras cortes la consideran una “esencial y asentada regla de derecho internacional” y “un principio fundamental, universal y absoluto del derecho de las naciones”. Su reconocimiento es tan amplio que incluso la Corte Europea de Justicia ha resuelto innumerables casos fundándose en la cosa juzgada, aun cuando las reglas de dicha Corte no reconocen expresamente este principio.

Añade, que lo mismo puede apreciarse cuando se analiza el sistema interamericano. La Corte Interamericana de Derecho Humanos ha destacado la importancia de la seguridad jurídica, la que se vincula íntimamente con la cosa juzgada. Así ha señalado que *“el marco legal debe brindar seguridad jurídica al ciudadano”*; y ha vinculado esta certeza con el efecto de cosa juzgada que producen las sentencias de los tribunales de justicia. Así lo ha señalado al afirmar que “una sentencia con carácter de cosa juzgada otorga certeza sobre el derecho o controversia discutida en el caso concreto y, por ende, tiene como uno de sus efectos la obligatoriedad o necesidad de cumplimiento. Lo contrario supone la negación misma del derecho involucrado”.



Foja: 1

Argumenta, que pese a que no hay en los instrumentos internacionales interamericanos un reconocimiento expreso al principio de la cosa juzgada, su configuración jurídica se ha ido consolidando. Tanto así, que hoy incluso se reconoce que las sentencias de tribunales internacionales gozan de “*cosa juzgada internacional*” reconociendo así que ya no solo los sistemas jurídicos domésticos se levantan sobre la seguridad jurídica que entrega la cosa juzgada, sino que también el de las cortes internacionales.

Aborda, una argumentación que se ha planteado en ocasiones en el sistema interamericano contra la cosa juzgada, en ciertas circunstancias. Se trata de la denominada “cosa juzgada fraudulenta” que, por ser tal, no puede desplegar los mismos efectos que la cosa juzgada.

Expone, que como la propia Corte Interamericana lo ha señalado la cosa juzgada fraudulenta “*resulta de un juicio en el que no se han respetado las reglas del debido proceso, o cuando los jueces no obraron con independencia e imparcialidad*”. Comenta, que en fallos posteriores, ha elaborado con mayor profundidad el alcance de la cosa juzgada fraudulenta, al establecer tres criterios necesarios para que sea procedente reclamar fraude:

- a) La actuación del tribunal que conoció el caso y decidió sobreseer o absolver al responsable de una violación a los derechos humanos o al derecho internacional obedeció al propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal.
- b) El procedimiento no fue instruido independiente o imparcialmente de conformidad con las debidas garantías procesales.
- c) No hubo la intención real de someter al responsable a la acción de la justicia.

Comenta, que la cosa juzgada fraudulenta tiene contornos muy precisos que impiden aplicarla para el caso que se analiza. Ante todo, porque en el concepto desarrollado en el derecho internacional de los derechos humanos, la misma aplica solo a la jurisdicción criminal y no a la civil.

Comenta, que ambos casos se tratan de demandas de responsabilidad civil, donde se solicita una indemnización, derivada de las actuaciones de los agentes del estado tras el golpe de Estado del año 1973, al que fueron sometidos los demandantes. Advierte, que en ningún caso se trata de sustraer a dichos agentes del Estado de su responsabilidad penal, lo que no ha sido discutido en autos; siendo instruidos por jueces independientes y con pleno respeto a las garantías del debido proceso.



Foja: 1

Expresa que en el juicio primitivo, el juez de primera instancia, el tribunal de segunda instancia y la E. Corte Suprema, como jueces independientes, rechazaron la pretensión de los demandantes, con pleno respeto a las garantías del debido proceso, aplicando las normas pertinentes al caso concreto, lo que generó como resultado el rechazo de la demanda.

Asegura, que de esta forma, no puede entenderse que existe cosa juzgada fraudulenta, sino que lo que existió fue una interpretación diversa de las normas jurídicas. Los jueces que decidieron en su momento resolvieron con independencia e imparcialidad; sin intenciones ocultas ni ningún otro elemento subjetivo que pueda inducir que estamos ante una cosa juzgada que no tiene el valor de tal.

Argumenta, que ha sido la propia Corte Suprema la que ha reconocido que las sentencias internacionales no pueden entrar en conflicto con instituciones fundamentales del derecho como lo es la cosa juzgada. Comenta, que si no lo pueden hacer sentencias de cortes internacionales respecto del caso específico que era objeto de la decisión del órgano internacional, mucho menos podrá exigirlo de casos respecto a los cuales no hay pronunciamiento alguno.

Detalla, que en efecto, en la sentencia de la Corte Interamericana del denominado caso “Norín Catrیمان”, el pleno declaró que las sentencias de la Corte de Apelaciones de Concepción que habían sido revisadas por la Corte Interamericana habían “quedado sin efecto”. Sin embargo, al hacerlo, deja expresa constancia de lo siguiente: *“Esta Corte considera que el único remedio posible de disponer en el caso que se revisa es declarar que las sentencias condenatorias abordadas por el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han perdido todo efecto, lo cual se constata por las razones de fondo ya invocadas, como asimismo por las medidas que ya se han adoptado por el Estado de Chile en torno a ellas. Decisión que no importa la invalidación de los referidos fallos, atento a los efectos procesales que en el orden nacional se asigna a la nulidad de las resoluciones judiciales, manteniendo la validez de tales sentencias en cuanto a la cosa juzgada, como es la imposibilidad de rever el conflicto que dio origen a los procesos que se revisan”*.

Hace presente, que nuestro ordenamiento constitucional dispone en su artículo 76, que *“Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos”*.



Foja: 1

Comenta, que en consecuencia, ninguna interpretación de alguna norma de derecho internacional puede servir de base para que los tribunales nacionales revivan procesos fenecidos y dejen sin efecto la cosa juzgada de que gozan sentencias firmes y ejecutoriadas, dictadas por los tribunales chilenos, en ejercicio pleno y legítimo de sus facultades.

Señala, que la cosa juzgada se considera, clara y explícitamente, como uno de los efectos de la sentencia, o como su específica eficacia, para que aquellos a quienes aprovecha el fallo, “impidan, definitiva o irrevocablemente, todo pronunciamiento posterior, sea en el mismo u otro sentido, esto es, con idéntico o diverso contenido y en el mismo o en otro proceso (exceptio res iudicate), concurriendo los presupuestos, requisitos, condiciones y modos correspondientes y, muy en especial, la triple identidad de que trata el ya citado art. 177 del C.P.C. chileno”.

Respecto a la causa en particular, expresa que deberá ser acogida la excepción de cosa juzgada opuesta en contra de don Segundo Omar Cartes Suazo. Añade, que extinto el derecho del demandante principal, único reconocido en el informe de la comisión Valech, los demás demandantes, que lo hacen aduciendo un daño moral reflejo respecto de lo sufrido por su padre y cónyuge, deberán ser rechazada como consecuencia de ser sus demandas evidentemente accesorias a la primera. Sostiene, que habiendo ya sido rechazada la demanda de don Segundo Cartes Suazo, las demandas de su cónyuge e hija Maaly Espinoza Aguilera y Claudia Cartes Espinoza, han quedado sin fundamento, por lo que hace imposible que ellas sean acogidas independientemente de lo dispuesto ya por sentencia firme y ejecutoriada.

Respecto a los actores que ejercen su acción en sus calidades de cónyuge e hija de don Segundo Cartes Suazo, invocando un daño moral propio en su calidades de víctimas de violaciones a los derechos humanos, sin que hubieran sido reconocidos por el Estado como víctimas de Prisión Política y Tortura por la referida Comisión Valech I, ni por la Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura (conocida como Comisión Valech II); el demandado controvierte los presupuestos de la demanda, señalando que no es suficiente el invocar la relación de parentesco o cercanía con la víctima directa de prisión política y torturas.

Reitera, que estas demandantes concurren en sus calidades de víctimas por repercusión o rebote, por torturas y prisión política de su cónyuge y padre, y no de



Foja: 1

ellas. Sin embargo, estos actores no figuran como víctimas de prisión política y tortura, en ninguno de los informes emitidos por la Comisión Valech, en diciembre de 2004, julio de 2005 ni agosto de 2011.

Afirma, que no teniendo las calidades de víctimas, carecen de legitimación activa para interponer la presente demanda.

Hace presente, que Segundo Cartes, quién si es directamente víctima de prisión política y torturas, es decir, el legitimado activo para demandar, también comparece en estos autos pretendiendo una indemnización por el daño moral sufrido como consecuencia de la prisión política, detención y torturas que habría vivido.

Expone, que el daño, para ser indemnizado debe ser personal, actual, real y cierto, lo que significa que sólo quien lo ha sufrido puede demandar su reparación. Si bien el daño reflejo o por repercusión, se puede considerar un daño personal, este sólo puede ser indemnizado cuando esté dentro de ciertos límites. Expresa, que no niega que la muerte pueda generar un daño reflejo para sus familiares; sin embargo, asegura que en el caso sub-lite, no puede considerarse que se encuentre contemplado en ninguno de los dos casos que la doctrina y la jurisprudencia han planteado como causantes de daño reflejo (muerte o incapacidad).

Comenta, que extender el daño moral por repercusión a extremos tales como los descritos en esta demanda, ocurridos por lo demás hace décadas, donde la víctima directa y titular de la acción comparece en estos mismos autos demandando la indemnización que le pudiese corresponder; se genera un injusto que afecta a la legitimidad del interés protegido con la responsabilidad civil y, por ende, la acción que pretende ese daño debe ser rechazada.

En subsidio, opone la excepción de improcedencia de las indemnizaciones dinerarias demandadas por la cónyuge y la hija, por limitación de la justicia transicional, además de haber sido reparada.

Detalla, que la indemnización solicitada en autos se desenvuelve en el marco de infracciones a los Derechos Humanos, cuya comprensión se da en el ámbito de la llamada "Justicia Transicional", tanto en el Derecho Interno como en el Internacional. Expresa, que sólo desde esa óptica pueden analizarse y comprenderse los valores e intereses en juego en materia indemnizatoria. Ello porque en este ámbito se ha de atender tanto a la necesidad de que la sociedad



Foja: 1

reconozca los errores del pasado para que éstos no se repitan en el futuro, como a la necesidad de decidir qué proporción de los recursos económicos públicos deberá ser destinada a reparar a las víctimas.

Indica, que no es posible omitir el hecho que las arcas fiscales, deben satisfacer numerosas necesidades de toda la sociedad, indica, que lo anterior no puede ser un factor que impida considerar la reparación pecuniaria de aquellos que son y fueron los directamente afectados en los procesos de violación a los derechos humanos acontecidos en nuestro país.

Comenta, que no es extraño que muchos de los sistemas indemnizatorios creados en el marco de la justicia transicional privilegien a algunos grupos en desmedro de otros; se compensen algunos daños y se excluyan otros; o se fijen legalmente, luego de un consenso público, montos, medios de pago o medidas especiales de reparación.

Relata, que la Ley 19.992 ha constituido un esfuerzo trascendental de reparación, pues mediante ella se hizo posible atender a la necesidad de reparar económicamente a las víctimas de prisión política y tortura mediante prestaciones en dinero -preferentemente en cuotas mensuales- con lo que, sin desfinanciar la caja fiscal, permitió y permite que numerosas víctimas, obtengan mes a mes una reparación monetaria, sin que por ello el Estado deje de cumplir con sus otras obligaciones de interés público.

Detalla, que en términos de costos generales para el Estado, este tipo de indemnizaciones ha significado, a diciembre de 2019, en concepto de:

a) Pensiones: la suma de \$247.751.547.837.- como parte de las asignadas por la Ley 19.123 (Comisión Rettig) y de \$648.871.782.936.- como parte de las asignadas por la Ley 19.992 (Comisión Valech);

b) Bonos: la suma de \$41.910.643.367- asignada por la Ley 19.980 (Comisión Rettig) y de \$23.388.490.737.- por la ya referida Ley 19.992; y

c) Desahucio (Bono compensatorio): la suma de \$1.464.702.888.- asignada por medio de la Ley 19.123.-

d) Bono Extraordinario (Ley 20.874): la suma de \$23.388.490.737-

En consecuencia, a diciembre de 2019, el Fisco había desembolsado la suma total de \$992.084.910.400.-





Foja: 1

Hace presente, que la ley 19.992 y sus modificaciones establecieron una pensión anual de reparación y otorgó otros beneficios a favor de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos individualizados en el anexo *“Listado de prisioneros políticos y torturados”* de la Nómina de personas Reconocidas como Víctimas. Así, se estableció una pensión anual reajutable de \$1.353.798 para beneficiarios menores de 70 años; de \$1.480.284 para beneficiarios de 70 o más años y de \$1.549.422, para beneficiarios mayores de 75 años. Adicionalmente, consigna que la ley 20.874 determinó un Aporte Único de Reparación, por \$1.000.000 para cada una de las víctimas individualizadas en las nóminas Valech y de \$600.000 a favor de cada una de las viudas de dichas víctimas.

Afirma, que el impacto indemnizatorio de este tipo de reparaciones ha sido alto. Ellas son una buena manera de concretar las medidas que la Justicia Transicional exige en estos casos, obteniéndose con ello compensaciones económicas razonables, que resultan coherentes con las fijadas por los tribunales en casos de pérdidas culposas de familiares.

Señala, que para que ello fuera viable, se determinó una indemnización legal, que optó por beneficiar a la víctima de prisión política y tortura, pretiriendo al resto de las personas ligadas por vínculos de parentesco o de amistad y cercanía, quienes fueron excluidas, sin perjuicio de otras reparaciones satisfactivas a éstos últimos, los que, no obstante haber sido descartados de pagos directos en dinero, se les consideró en diversos desagravios de carácter simbólico y en programas, especialmente de salud, para reparar el daño moral.

Advierte, que ello no es ajeno a otras normativas, en que, ante el pretium doloris, está limitada la determinación de quienes son los sujetos de daño por repercusión o rebote para deducir acciones pecuniarias, pues la extensión de la reparación económica debe zanjarse en algún punto.

Expone, que en nuestro derecho, se pueden traer a colación distintas normas, entre ellas, el artículo 43 de la Ley N°16.744, que prescribe que producida la muerte de un afiliado por accidente del trabajo o enfermedad profesional o si fallece el inválido pensionado, tendrán derecho de pensiones de supervivencia el cónyuge, hijos, madre de sus hijos naturales y los ascendientes o descendientes que le causaban asignación familiar. Así también, las normas sucesorias de los artículos 988 y siguientes del Código Civil establecen una prelación, en que los asignatarios más directos -hijos y cónyuge- excluyen al resto.



Foja: 1

Sostiene que siendo los recursos escasos, tiene que haber un límite que ponga fin a la línea de extensión reparativa y en el caso de autos, han sido preteridos por la ley como beneficiarios de una asignación en dinero por el daño que invocan, en beneficio de la víctima, sin que ello implique afirmar que no hayan obtenido una reparación satisfactiva por otra vía.

Concluye afirmando, que la pretensión económica demandada es improcedente porque en la especie, existe un sistema legal de reparación pecuniaria en el que se excluyó a los parientes, siendo titulares de la acción de reparación los afectados directamente por el daño.

Sin perjuicio de lo anterior, afirma, que los demandantes han obtenido igualmente otras formas de reparación satisfactiva. Expresa, que el hecho que no hayan tenido derecho a un pago en dinero, -por la preterición legal- no significa que no hayan obtenido reparación por el daño sufrido, por lo que alega la satisfacción de éste.

Indica, que tratándose en la especie de un daño extrapatrimonial, su compensación no se desenvuelve necesariamente en el aspecto netamente económico, sino que es posible reparar mediante la entrega de otras importantes prestaciones, como aconteció en el caso de autos, y que vinieron a satisfacer al daño moral sufrido.

Comenta, que desde la perspectiva de las víctimas por repercusión, la reparación de los daños sufridos juega un rol protagónico en el reconocimiento de aquella medida de justicia por tantos años buscada. Señala, que en este sentido, las negociaciones entre el Estado y las víctimas revelan que tras toda reparación existe una compleja decisión de mover recursos económicos públicos, desde la satisfacción de un tipo de necesidades públicas, a la satisfacción de otras radicadas en grupos humanos más específicos. Este concurso de intereses o medida de síntesis se exhibe normalmente en la diversidad de contenidos que las comisiones de verdad o reconciliación proponen como programas de reparación.

Detalla, que estos programas incluyen beneficios de salud, gestos simbólicos u otras medidas análogas diversas a la simple entrega de una cantidad de dinero.

Expresa, que la llamada Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, en su Informe Final, planteó una serie de “propuestas de reparación”, entre las cuales se encontraban diversas prestaciones, no solamente pecuniarias. Ello se desprende del concepto, que el Ejecutivo, entendió por reparación, esto es: *“un conjunto de*



Foja: 1

*actos que expresen el reconocimiento y la responsabilidad que le cabe al Estado en los hechos y circunstancias que son materia de dicho Informe*". De esta forma, en la discusión de la ley N° 19.123, en diversas oportunidades, se hizo referencia a la reparación "moral" buscada por el proyecto.

Expresa, que en este sentido, puede indicarse que la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se concretó también por reparaciones simbólicas, y no meramente pecuniarias, a través de actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones y que permitieran recuperar el honor, dignidad y buen nombre. Este tipo de acciones pretende reparar, ya no a través de un pago de dinero paliativo del dolor – siempre discutible en sus virtudes compensatorias – sino precisamente tratando de entregar una satisfacción a esas víctimas que logre reparar el dolor y la tristeza actual y con ello reducir el daño moral.

Menciona, que la doctrina, en la materia, se ha inclinado por estimar que la indemnización del daño moral tiene precisamente un carácter satisfactivo, consistente en dar a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio, que le permita atenuar sus efectos, morigerándolos o haciéndolos más soportables.

Comenta, que en el caso de personas como las de autos, las reparaciones satisfactivas se orientaron en una línea distinta a la meramente económica, entre otras, la ejecución de diversas obras de reparación simbólica a saber:

- a) La construcción del Memorial del Cementerio General en Santiago realizada en el año 1993.
- b) El establecimiento, mediante el Decreto N° 121, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 10 de octubre de 2006, del Día nacional del detenido desaparecido. Se elige el día 30 de agosto de cada año, en atención a que la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos ha instituido este día como día internacional del detenido-desaparecido.
- c) La construcción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Esta obra fue inaugurada el 11 de enero de 2010 y su objetivo es dar cuenta de las violaciones a los derechos humanos cometidas entre los años 1973 y 1990 y que quedaron plasmados en imágenes, íconos, documentos o monumentos.
- d) El establecimiento, mediante Ley N° 20.405, del Premio Nacional de los Derechos Humanos.



Foja: 1

e) La construcción de diversos memoriales y obras a lo largo de todo el país y en lugares especialmente importantes para el recuerdo de las Infracciones a los DDHH, tales como Villa Grimaldi y Tocopilla, entre otras. Destacan, el "Memorial de los prisioneros de Pisagua" en el Cementerio de esa ciudad; el Mausoleo "Para que nunca más" en el Cementerio 3 de Iquique; el Memorial "Si estoy en tu memoria, soy parte de la historia" en las afueras del Cementerio Municipal de Tocopilla; el Memorial "Parque para la Preservación de la Memoria Histórica de Calama" en el camino a San Pedro de Atacama; el Memorial en homenaje a 31 víctimas de Antofagasta en la puerta principal del Cementerio General de la ciudad; el "Memorial en homenaje a los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de la región de Atacama" en el Frontis del Cementerio Municipal de esa ciudad; el "Memorial por los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos" en la Plaza de Armas de Curacaví; el "Memorial a las víctimas detenidas desaparecidas y ejecutadas políticas del Partido Socialista" en la sede de este partido; el "Memorial de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Talca" en esa ciudad; y el "Memorial escultórico de los Derechos Humanos de Punta Arenas" en el Cementerio Municipal de esa ciudad.

En suma, y como conclusión, el cúmulo de reparaciones indicadas ha producido satisfacción de los mismos daños cuya reparación se persigue. De esta forma, los ya referidos mecanismos de reparación, al haber compensado precisamente aquellos daños, no pueden, por ello, ser exigidos nuevamente.

Afirma, que de todo lo expresado hasta ahora puede concluirse que los esfuerzos del Estado por reparar a las víctimas de DD.HH. no sólo han cumplido todos los estándares internacionales de Justicia Transicional, sino que han provisto indemnizaciones razonables en relación con nuestra realidad económica que efectivamente han apuntado a compensar a las víctimas por los daños, tanto morales como patrimoniales, sufridos a consecuencia de las violaciones a los DD.HH.

Asegura, que tanto la indemnización que se solicita en estos autos como el cúmulo de reparaciones hasta ahora indicadas, pretenden compensar el mismo daño ocasionado por los mismos hechos. De esta forma, los ya referidos mecanismos de reparación han compensado precisamente aquellos daños, no pudiendo, por ello, ser exigidos nuevamente.

Menciona, que órganos internacionales de tanta importancia como la Corte Interamericana de Justicia han valorado positivamente la política de reparación de violaciones de Derechos Humanos desarrollada por Chile, a tal punto que han



Foja: 1

denegado otro tipo de reparación pecuniaria luego de tomar en consideración los montos ya pagados por el Estado por conceptos de pensiones, beneficios y prestaciones públicas.

Señala, que en este mismo sentido, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha considerado los beneficios de establecer un sistema compensatorio único para todas las víctimas que no genere desigualdades.

Indica, que en un documento denominado “Herramientas Jurídicas para Estados Post-Conflictos” (Rule of Law for post-conflicts states) se ha referido expresamente a los programas de reparación. En él se ha reconocido la existencia de un problema al exigir indemnización por la vía de los programas de reparación y paralelamente, ejercer una acción civil, por la vía judicial. Comenta, que una vez que el Gobierno ha hecho esfuerzos de buena fe para crear un sistema administrativo que facilita la entrega de beneficios a las víctimas, permitir a los mismos beneficiarios iniciar litigios contra el Estado genera el peligro de obtener un doble beneficio por el mismo daño. Pero todavía peor, ello pone en riesgo el sistema de reparaciones en su totalidad, puesto que mientras el primer problema puede ser fácilmente solucionado estipulando que no pueden perseguirse beneficios dos veces por la misma violación, el segundo no es fácilmente evitable toda vez que los beneficios obtenidos en los tribunales pueden fácilmente sobrepasar a los de un programa masivo de reparaciones. Advierte, que esto puede generar un cambio en las expectativas y generalizar una sensación de desilusión con los programas administrativos. Incluso más, este cambio puede ser motivado por casos que seguramente no son representativos de todo el universo de víctimas y que más encima vienen a acentuar las desigualdades sociales entre las víctimas. Así, víctimas más educadas o pertenecientes a las ciudades tienen normalmente una probabilidad más alta de conseguir reparaciones por la vía de la litigación civil que víctimas más pobres, menos educadas, que habitan en el campo o que pertenecen a grupos étnicos, raciales o religiosos marginados. Argumenta, que es precisamente el rechazo a nuevas peticiones de indemnización lo que fortalece los programas de Justicia Transicional. Lo contrario, esto es, dar lugar nuevamente a demandas de indemnización de perjuicios, genera inevitablemente un acceso desigual a la justicia y a las reparaciones generando el efecto de debilitar la decisión política y administrativa de reparación.

Concluye, haciendo presente, que estando entonces la acción interpuesta en autos basadas en los mismos hechos y pretendiendo ellas indemnizar los mismos daños que han inspirado precisamente el cúmulo de acciones reparatorias, ya



Foja: 1

enunciadas, es que opone la excepción de reparación satisfactiva por haber sido ya indemnizadas las demandantes que accionan en sus calidades de cónyuge e hija del demandante principal.

En cuanto al demandante don Segundo Cartes Suazo, opone la excepción de reparación integral por haber sido ya indemnizado el demandante, en tanto víctima directa reconocida por la Comisión Valech.

Expresa, que no resulta posible comprender el régimen jurídico de este tipo de reparaciones por infracciones a los Derechos Humanos si no se posicionan correctamente estas indemnizaciones en el panorama jurídico nacional e internacional. En efecto, dicha comprensión sólo puede efectuarse al interior –y desde– lo que ya es común considerar, el ámbito de la llamada “*Justicia Transicional*”.

Advierte, que el denominado dilema “justicia versus paz” es, sin lugar a duda, uno de los pilares sobre los cuales descansa el edificio de aquella justicia transicional. Argumentos en favor de amnistías generales que porten la necesaria tranquilidad a un país, deben lidiar con la imperiosa necesidad de que una sociedad se mire a sí misma y reconozca los errores del pasado para así pronunciar aquel imperioso “nunca más”. En esta perspectiva, las transiciones son, y han sido siempre, medidas de síntesis mediante las cuales determinadas sociedades, en específicos momentos históricos, definen las proporciones de sacrificio de los bienes en juego al interior de aquel profundo dilema. Por otro lado, comenta, que desde la perspectiva de las víctimas, la reparación de los daños sufridos juega un rol protagónico en el reconocimiento de aquella medida de justicia por tantos años buscada. Hace presente, que el éxito de los procesos penales se concentra sólo en el castigo a los culpables no preocupándose del bienestar de las víctimas.

En este sentido, las negociaciones entre el Estado y las víctimas revelan que tras toda reparación existe una compleja decisión de mover recursos económicos públicos, desde la satisfacción de un tipo de necesidades públicas a la satisfacción de otras radicadas en grupos humanos más específicos. Este concurso de intereses o medida de síntesis se exhibe normalmente en la diversidad de contenidos que las Comisiones de Verdad o Reconciliación proponen como programas de reparación.

Detalla, que estos programas, en efecto, incluyen beneficios educacionales, de salud, gestos simbólicos u otras medidas análogas diversas a la simple entrega de una cantidad de dinero. En este sentido, no es un secreto que las transiciones han



Foja: 1

estado, en todos los países que las han llevado a cabo, basadas en complejas negociaciones.

Relata, que los objetivos a los cuales se abocó preferentemente el gobierno del Presidente Patricio Aylwin en lo que respecta a la justicia transicional fueron *“(a) el establecimiento de la verdad en lo que respecta a las violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura; (b) la provisión de reparaciones para los afectados; y (c) el favorecimiento de las condiciones sociales, legales y políticas que prevean que aquellas violaciones puedan volver a producirse”*.

En lo relacionado con aquel segundo objetivo, la llamada Comisión Verdad y Reconciliación, o también llamada Comisión Rettig, en su Informe Final propuso una serie de “propuestas de reparación” entre las cuales se encontraba una “pensión única de reparación para los familiares directos de las víctimas” y algunas prestaciones de salud. Dicho informe sirvió de causa y justificación al proyecto de ley que el Presidente de la República envió al Congreso y que luego derivaría en la Ley 19.123, que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación.

Comenta, que el mensaje de dicho proyecto de ley fue claro al expresar que por él se buscaba, en términos generales, *“reparar precisamente el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas”*.

Por su parte, y en lo relativo a la forma en que se entendió la idea de reparación, indica que el Ejecutivo, siguiendo el referido Informe de la comisión, entendió por reparación *“un conjunto de actos que expresen el reconocimiento y la responsabilidad que le cabe al Estado en los hechos y circunstancias que son materia de dicho Informe”*. A dicha reparación ha de ser convocada y concurrir toda la sociedad chilena, en *“un proceso orientado al reconocimiento de los hechos conforme a la verdad, a la dignificación moral de las víctimas y a la consecución de una mejor calidad de vida para las familias más directamente afectadas”*. Compensación de daños morales y mejora patrimonial, son así dos claros objetivos de estas normas reparatorias.

De esta forma, en la discusión de la ley 19.123 el objetivo indemnizatorio de este grupo de normas quedaría bastante claro. En diversas oportunidades, por ejemplo, se hizo referencia a la reparación “moral y patrimonial” buscada por el proyecto. La noción de reparación “por el dolor” de las vidas perdidas se encontraba también en otras tantas ocasiones. También está presente en la discusión la idea de que el proyecto buscaba constituir una iniciativa legal “de indemnización” y reparación.



Foja: 1

Incluso se hace expresa referencia a que las sumas de dinero acordadas son para hacer frente la “responsabilidad extracontractual” del Estado.

Señala, que esta idea reparatoria se plasmó de manera bastante clara cuando dentro de las funciones de la Comisión se indicó que le corresponderá especialmente a ella promover “la reparación del daño moral de las víctimas” a que se refiere el artículo 18.

Afirma, que la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se ha realizado principalmente a través de tres tipos de compensaciones, a saber:

- a) Reparaciones mediante transferencias directas de dinero;
- b) Reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y
- c) Reparaciones simbólicas.

Asegura, que por medio de estos tres tipos de reparaciones se ha concretado el objeto de nuestro particular proceso de justicia transicional, que en lo que a este acápite respecta, busca no otra cosa que la precisa reparación moral y patrimonial de las víctimas.

En cuanto a las transferencias directas en dinero, advierte que diversas han sido las leyes que han establecido este tipo de reparaciones, incluyendo también -como se ha mencionado- a las personas que fueron víctimas de apremios ilegítimos.

Destaca, que en la discusión legislativa de estas normas se enfrentaron principalmente dos posiciones. Por un lado, quienes sostenían que la reparación que se iba a entregar debía hacerse a través de una suma única de dinero mientras aparecieron otros que abogaban por la entrega de una pensión vitalicia.

Aclara, que ello no implicaba de manera alguna que la primera opción tendría efectos indemnizatorios y no así la segunda. Ambas modalidades tendrían fines innegablemente resarcitorios.

Reitera, que a diciembre de 2019 el Estado de Chile ha desembolsado la importante suma total de \$ 992.084.910.400.-

Comenta, que una pensión mensual es también una forma de reparar un perjuicio actual y, aunque ella comporte una sucesión de pagos por la vida del beneficiario, ello no obsta a que podamos valorizarla para poder saber cuál fue su impacto





Foja: 1

compensatorio. Precisa, que el cálculo de los efectos indemnizatorios de una pensión vitalicia puede realizarse simplemente sumando las cantidades pagadas a la fecha, como asimismo las mensualidades que todavía quedan por pagar.

Expresa, que el impacto indemnizatorio de este tipo de pensiones es bastante alto. Asegura, que ellas son, como se ha entendido de manera generalizada, una buena manera de concretar las medidas que la justicia transicional exige en estos casos obteniéndose con ello, compensaciones razonables que están en coherencia con las fijadas por los tribunales en casos de pérdidas culposas de familiares.

Sostiene, que el actor ha recibido beneficios pecuniarios al amparo de la ley N° 19.992 y sus modificaciones.

En cuanto a las reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas, comenta, que tal como sucede en la mayoría de los procesos de justicia transicional, la reparación no se realiza sólo mediante transferencias monetarias directas, sino que también a través de la concesión de diversos derechos a prestaciones.

Detalla, que en este sentido, se concedió a los beneficiarios tanto de la Ley 19.234 como de la Ley 19.992, el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) en Servicios de Salud del país. Para acceder a estos servicios la persona debe concurrir al hospital o consultorio de salud correspondiente a su domicilio e inscribirse en la correspondiente oficina del PRAIS.

Añade, que además del acceso gratuito a las prestaciones de la red asistencial, PRAIS cuenta con un equipo de salud especializado y multidisciplinario de atención exclusiva a los beneficiarios del Programa. En la actualidad cuentan con un equipo PRAIS en los 29 Servicios de Salud, compuesto en su mayoría por profesionales médicos psiquiatras, generales, de familia, psicólogos y asistentes sociales, encargados de evaluar la magnitud del daño y diseñar un plan de intervención integral, a fin de dar respuesta al requerimiento de salud de los beneficiarios.

A nivel presupuestario, PRAIS cuenta con un financiamiento de continuidad desde el año 2006. El año 2020, el Programa sostuvo un incremento presupuestario importante, siendo el presupuesto global de M\$6.543.883.- Este presupuesto se distribuye por cada Servicio de Salud, permitiendo cubrir gastos asociados al



Foja: 1

recurso humano de los equipos de salud PRAIS, equipamiento y para la adquisición de ayudas técnicas o prestaciones que requieren beneficiarios en el extra sistema, focalizando principalmente en la población directamente afectada y en el artículo 10 de la Ley 19.992.- Sin perjuicio de ello, como usuarios del sistema público de salud, los beneficiarios adquieren los derechos establecidos para todos los usuarios FONASA; obtienen el derecho de organizarse y participar en los consejos de participación que la ley de Autoridad Sanitaria crea, tanto en los establecimientos como a nivel de la red y secretaría regional, y; adquieren el derecho a organizarse y cooperar con el equipo PRAIS en la difusión del programa y en la promoción del resto de los Derechos Humanos. Se les ofrece asimismo apoyo técnico y rehabilitación física para la superación de lesiones físicas que sean producto de la prisión política o tortura.

Agrega, que igualmente se incluyeron beneficios educacionales consistentes en la continuidad gratuita de estudios básicos, medios o superiores. El organismo encargado de orientar a las personas para el ejercicio de este derecho es la División de Educación Superior del Ministerio de Educación.

Asimismo, se concedieron beneficios en vivienda, correspondientes al acceso a subsidios de vivienda.

Respecto a las reparaciones simbólicas indica, que este tipo de acciones pretende reparar, ya no a través de un pago de dinero paliativo del dolor –siempre discutible en sus virtudes compensatorias– sino precisamente tratando de entregar una satisfacción a esas víctimas que en parte logre reparar el dolor y la tristeza y con ello reducir el daño moral.

Señala, que estando las acciones interpuestas en autos basadas en los mismos hechos y pretendiendo ella indemnizar los mismos daños que han inspirado precisamente el cúmulo de acciones reparatorias, ya enunciadas, y al tenor de documentos oficiales que serán acompañados en su oportunidad, es que opone la excepción de reparación integral por haber sido ya indemnizada la demandante de la presente causa.

En subsidio de las excepciones precedentes con relación a todos los actores, opone a la demanda, respecto de todos y cada uno de ellos, la excepción de prescripción extintiva de la acción deducida conforme a los siguientes argumentos.



Foja: 1

En primer lugar, asegura, que las acciones indemnizatorias de familiares de víctimas de prisión política y tortura no se ejercen como causadas directamente por crímenes de lesa humanidad, por lo que son plenamente prescriptibles.

Hace presente, que, conjuntamente con la víctima directa en estos autos, comparece también su cónyuge e hija pretendiendo una indemnización por los daños sufridos como consecuencia de las violaciones a los derechos humanos por el sufrido.

Advierte, que quien sufrió efectivamente violaciones a los derechos humanos fue precisamente la víctima directa, esto es, don Segundo Cartes Suazo, mas no así su grupo familiar.

Indica, que del relato señalado en la demanda, se hace presente que el hijo de la víctima directa no fue directamente afectado por acciones de agentes del Estado, sino que, los daños señalados serían una consecuencia de la detención y tortura sufrida por su familiar, mas no así por ellos mismos. Advierte, que en el caso de la hija, ella reconoce que solo se enteró de estos hechos a la edad de 26 años.

De este modo, en tanto las aludidas demandantes no son víctimas de violaciones a los derechos humanos, asegura, que no estamos en presencia de crímenes de lesa humanidad, resultando aplicable la institución de la prescripción.

Menciona, que opone la excepción de prescripción de las acciones de indemnización de perjuicios con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 2497 del mismo Código, solicitando que, por encontrarse prescritas, se rechace la demanda en todas sus partes.

Advierte, que conforme al relato efectuado por los demandantes la detención ilegal, prisión y tortura que sufrió la víctima, ocurrió en el año 1974.

Expresa, que entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las propias víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, el 04 de enero de 2023, igualmente ha transcurrido el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2332 del Código Civil.



Foja: 1

En consecuencia, opone la excepción de prescripción de 4 años establecida en el artículo 2332 del Código Civil, pidiendo que se acoja y se rechacen íntegramente la acción indemnizatoria deducida como consecuencia de ello, por encontrarse prescrita. En subsidio, en caso que el Tribunal estime que la norma anterior no es aplicable al caso de autos, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2.515, en relación con el artículo 2.514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la anotada fecha de notificación de las acción civil que contesto, transcurrió con creces el plazo que establece el citado artículo 2.515 del Código Civil.

Comenta, que pretender que la responsabilidad del Estado sea imprescriptible, sin que exista un texto constitucional o legal expreso que lo disponga, llevaría a situaciones extremadamente graves y perturbadoras. Por eso es que la jurisprudencia ha señalado que *“para que un derecho de índole personal y de contenido patrimonial sea imprescriptible, es necesario que exista en nuestra legislación disposiciones que establezcan su imprescriptibilidad”*.

Hace presente, que la prescripción es una institución universal y de orden público.

Señala, que las normas del Título XLII del Libro IV del Código Civil, que la consagran y, en especial, las de su Párrafo I, se han estimado siempre de aplicación general a todo el derecho y no sólo al derecho privado. Entre estas normas está el artículo 2.497 del citado cuerpo legal, que manda aplicar las normas de la prescripción a favor y en contra del Estado.

Sostiene, que esta última disposición consagra, con carácter obligatorio, el principio de que, al igual que tratándose de las relaciones entre particulares (que es el sentido de la expresión “igualmente” que emplea el precepto) la prescripción afecta o favorece, sin excepciones, a las personas jurídicas de derecho público, a pesar de que éstas, como lo señala el artículo 547, inciso 2º, del Código Civil, se rijan por leyes y reglamentos especiales.

Añade, que la prescripción es una institución de aplicación general en todo el ámbito jurídico y de orden público, pues no cabe renunciarla anticipadamente.

Expresa, que la responsabilidad que se atribuye al Estado y la que se reclama en contra de particulares tienen la misma finalidad: resarcir un perjuicio extrapatrimonial, en este caso, a través de un incremento patrimonial del afectado.



Foja: 1

Expone, que la prescripción tiene por fundamento dar fijeza y certidumbre a toda clase de derechos emanados de las relaciones sociales y de las condiciones en que se desarrolla la vida, aun cuando éstas no se ajusten a principios de estricta equidad, que hay que subordinar, como mal menor, al que resultaría de una inestabilidad indefinida.

Destaca que la prescripción, por sobre todas las cosas, es una institución estabilizadora e indispensable en nuestro orden social. Está reconocida por el ordenamiento jurídico con una perspectiva esencialmente pragmática, en atención a que existe un bien jurídico superior que se pretende alcanzar, consistente en la certeza de las relaciones jurídicas.

Argumenta, que la prescripción no es -en sí misma- como usualmente se piensa, una sanción para los acreedores y un beneficio para los deudores. Sanción o beneficio, en su caso, no son más que consecuencias indirectas de la protección del interés general ya referido. Comenta, que resulta inaceptable presentar a la prescripción extintiva como una institución abusiva de exención de responsabilidad, contraria o denegatoria del derecho a reparación contemplado en la Constitución Política y en los Tratados Internacionales.

Advierte que la prescripción no exime la responsabilidad ni elimina el derecho a la indemnización. Solamente ordena y coloca un necesario límite en el tiempo para que se deduzca en juicio la acción.

Argumenta, que no hay conflicto alguno entre la Constitución Política y la regulación del Código Civil. Lo habría si aquellos textos prohibieran la prescripción o si el derecho interno no admitiere la reparación vía judicial oportunamente formulada. En ausencia de ese conflicto, no hay contradicción normativa.

Sostiene, que en la especie, el ejercicio de las acciones ha sido posible durante un número significativo de años, desde que la demandante estuvo en situación de hacerlo.

Comenta, que nuestra Excma. Corte Suprema, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 780 del Código de Procedimiento Civil dictó, el 21 de enero de 2013, una histórica sentencia de unificación de jurisprudencia de demandas de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile por hechos acaecidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990.

Detalla, que en dicha sentencia, nuestro Máximo Tribunal en Pleno, zanjó esta controversia, señalando:



Foja: 1

1º) Que el principio general que debe regir la materia es el de la prescriptibilidad de la acción de responsabilidad civil, de modo que la imprescriptibilidad debe, como toda excepción, ser establecida expresamente y no construida por analogía o interpretación extensiva.

2º) Que los tratados internacionales invocados, especialmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Convenio de Ginebra sobre Tratamiento de los Prisioneros de Guerra y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, no contienen norma alguna que declare imprescriptible la responsabilidad civil; la imprescriptibilidad que algunos de ellos establecen se refiere sólo a la responsabilidad penal.

3º) Que no existiendo una norma especial que determine qué plazo de prescripción debe aplicarse en estos casos, debe recurrirse al derecho común, que en esta materia está representado por la regulación del Código Civil relativa a la responsabilidad extracontractual, y en particular por el artículo 2332 que fija un plazo de cuatro años desde la perpetración del acto.

4º) Que, no obstante la letra de dicho precepto, el plazo debe contarse no desde la desaparición del secuestrado (detención de los demandantes en este caso), sino desde que los titulares de la acción indemnizatoria tuvieron conocimiento y contaron con la información necesaria y pertinente para hacer valer el derecho al resarcimiento del daño ante los tribunales de justicia.

Expresa, que las sentencias anteriores y posteriores al citado fallo no hacen más que reiterar la misma doctrina, constituyendo jurisprudencia contundente en la materia.

En cuanto al contenido patrimonial de la acción indemnizatoria, señala, que la indemnización de perjuicios, cualquiera sea el origen o naturaleza de estos, no tiene un carácter sancionatorio, de modo que jamás ha de cumplir un rol punitivo para el obligado al pago y su contenido es netamente patrimonial. De allí que no ha de sorprender ni extrañar que la acción destinada a exigirla esté -como toda acción patrimonial- expuesta a extinguirse por prescripción.

Sobre el particular, indica, que como en forma reiterada se ha planteado por la doctrina fiscal sustentada en sus diversas defensas y lo ha recogido la reiterada jurisprudencia, que en la especie se ha ejercido una acción de contenido patrimonial que persigue hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del



Foja: 1

Estado, por lo que no cabe sino aplicar, en materia de prescripción, las normas del Código Civil, lo que no contraría la naturaleza especial de la responsabilidad que se persigue, en atención a que la acción impetrada pertenece -como se ha dicho- al ámbito patrimonial.

Advierte, que basta considerar que el derecho a indemnización puede ser y ha sido objeto de actos de disposición, tales como renuncia o transacción, incluso en casos de violaciones a los Derechos Humanos, por lo que no existe fundamento plausible para estimar que se trata de acciones ajenas a la prescripción liberatoria que no es sino una suerte de renuncia tácita por el no ejercicio oportuno de las acciones.

Respecto a las alegaciones en cuanto a que la acción patrimonial que persigue la reparación por los daños reclamados sería imprescriptible conforme al derecho internacional de los derechos humanos, expresa, que se hará cargo de ciertos instrumentos internacionales, adelantando desde ya que ninguno contempla la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de delitos o crímenes de lesa humanidad o que prohíba o impida la aplicación del derecho interno en esta materia.

Indica, que la “Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad”, aprobada por Resolución N° 2.391 de 26 de noviembre de 1968, y en vigor desde el año 1970, en su artículo 1° letras a) declara imprescriptibles a “los crímenes de guerra; y b) a los crímenes de lesa humanidad; pero cabe señalar –tal como lo ha reconocido la Excma. Corte Suprema- que en ninguno de sus artículos declara la imprescriptibilidad de las acciones civiles para perseguir la responsabilidad pecuniaria del Estado por estos hechos, limitando esta imprescriptibilidad a las acciones penales.

Agrega, que los Convenios de Ginebra de 1949, ratificados por Chile en 1951, se refieren exclusivamente a las acciones penales para perseguir la responsabilidad de los autores de los delitos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, de modo tal que no cabe extender la imprescriptibilidad a las acciones civiles indemnizatorias, tal como ha resuelto nuestro Máximo Tribunal.

Añade, que la Resolución N°3.074, de 3 de diciembre de 1973, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, denominada “*Principios de Cooperación Internacional para el descubrimiento, el arresto, la extradición y el castigo de los culpables de crímenes contra la humanidad*”, se refiere exclusivamente a las acciones penales para perseguir la responsabilidad de los autores de los delitos



Foja: 1

de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, de modo tal que no cabe extender la imprescriptibilidad a las acciones civiles indemnizatorias.

Afirma, que la Convención Americana de Derechos Humanos, no establece la imprescriptibilidad en materia indemnizatoria. En relación a esta Convención, destaca que al efectuar la ratificación, conforme al inciso 2° del artículo 5° de la Carta Fundamental, Chile formuló una reserva en orden a que el reconocimiento de la competencia, tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se refiere a hechos posteriores a la fecha del depósito del instrumento de ratificación, de 21 de agosto de 1990, o, en todo caso, a hechos cuyo principio de ejecución sea posterior al 11 de marzo de 1990.

Por otra parte, el artículo 63 de la Convención se encuentra ubicado en el Capítulo VIII, relativo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente en la sección segunda de dicho capítulo, referido a la competencia y funciones de esa Corte, facultándola para imponer condenas de reparación de daños, pero ello no impide la aplicación del derecho interno nacional ni de la institución de la prescripción, en Chile.

Es decir, el mandato contenido en esa disposición está dirigido a la Corte Interamericana y no a nuestros Tribunales, quienes deben aplicar la normativa de derecho interno que rige la materia.

Advierte, que el planteamiento de esta defensa fiscal ha sido reconocido por nuestro más alto Tribunal del país. Hace presente, que la Excma. Corte Suprema ha desestimado la aplicación de esa normativa en diversos fallos, como lo ha establecido conociendo del recurso de casación interpuesto en los autos Ingreso N° 1.133-06, caratulados “Neira Rivas, Gloria con Fisco de Chile”, de 24 de julio de 2007, y en la causa “Martínez Rodríguez y otra con Fisco de Chile”, autos ingreso N° 4.067-2006, en fallo de fecha 29 de octubre de 2007.

Argumenta, que no habiendo, en consecuencia, norma expresa de derecho internacional de derechos humanos, debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno, que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, y no pudiendo tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, el Tribunal no debe apartarse del claro mandato de la ley interna al resolver esta contienda y aplicar las normas contenidas en los artículos 2332 y 2497 del Código Civil, que establecen las reglas sobre prescriptibilidad de la responsabilidad patrimonial del Estado.





Foja: 1

En cuanto al daño e indemnización reclamada, expresa, que respecto del daño moral cuya indemnización pretenden estas demandantes que comparecen a título de cónyuge e hija de la víctima directa, se debe considerar la controversia de los hechos, debiendo las actoras acreditar las circunstancias fácticas de los daños pretendidos, así como su existencia, y el vínculo de causalidad entre éstos. En este sentido, hace tener presente que la prueba de la causalidad es un elemento de la responsabilidad civil que debe ser satisfecho mediante un umbral de suficiencia probatoria que permita tener por acreditada una determinada relación de causa y efecto entre el hecho por el cual se pretende indemnización -en este caso, la detención y tortura sufrida por la víctima directa-, y los daños por el cual se pretende indemnización.

Añade, que en el caso de la hija demandante, esta actora solo se enteró de la detención de su padre, después de 26 años de que los hechos ocurrieran, lo que de alguna manera, atenúa en gran medida el daño moral invocado.

Advierte, que en el eventual caso de acogerse una indemnización respecto de la cónyuge e hija que demandan un daño por repercusión, éste no podría ser el mismo monto que aquél que eventualmente se fije para la víctima directa de prisión y tortura.

En cuanto a la fijación de la indemnización por daño moral, hace presente que no puede dejar de considerarse que éste consiste en la lesión o detrimento que experimenta una persona, en general, en sus atributos o cualidades inmateriales, lo que dependerá, de las secuelas sufridas con motivo de los hechos señalados en el libelo y de conformidad a los antecedentes que obren en autos en la etapa probatoria del mismo.

Así, entonces, los llamados daños no patrimoniales recaen sobre elementos de difícil o imposible estimación pecuniaria, ya que su contenido no es económico, o al menos no directamente. Comenta, que ello produce a su respecto una imposibilidad latente e insuperable de evaluación y apreciación pecuniaria.

Expone, que en términos generales, la indemnización de perjuicios tiene por objeto restablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, otorgando a la víctima un valor equivalente a la cuantía del daño sufrido, para ponerla en el mismo estado que tenía antes del acto dañoso. Comenta, que la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino sólo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo



Foja: 1

más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva.

Por otra parte, advierte, que tampoco resulta procedente invocar la capacidad económica del demandante y/o del demandado como elemento para fijar la cuantía de la indemnización, pues, como se ha dicho, el juez sólo está obligado a atenerse a la extensión del daño sufrido por la víctima, en la cual no tienen influencia estas capacidades.

Señala, que no habiendo norma legal que establezca una excepción relativa a la capacidad económica habrá de estarse al principio general y básico de la cuantificación conforme a la extensión del daño, ni más ni menos, con absoluta prescindencia del patrimonio del obligado al pago. Comenta, que en tal sentido, las idénticas cifras pretendidas en la demanda como compensación del daño moral resultan excesivas teniendo en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile en esta materia, y los montos promedios fijados por nuestros tribunales de justicia, que en esta materia han actuado con mucha prudencia.

En subsidio de las excepciones precedentes, expresa, que la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos del Estado y guardar armonía con los montos establecidos por los Tribunales.

Detalla, que en la fijación del daño moral por los hechos de autos, el Tribunal debe considerar todos los pagos recibidos por los actores a través de los años de parte del Estado, conforme a las leyes de reparación (19.234, 19.992, sus modificaciones y demás normativa pertinente), y que seguirán percibiendo a título de pensión, y también los beneficios extrapatrimoniales que estos cuerpos legales contemplan, pues todos ellos tienen por objeto reparar el daño moral.

Comenta, que de no accederse a esta petición subsidiaria, implicaría un doble pago por un mismo hecho, lo cual contraría los principios jurídicos básicos del derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces.

Añade, que para la adecuada regulación y fijación del daño moral deben considerarse como un parámetro válido los montos establecidos en las sentencias de los tribunales en esta materia, lo que implica rebajar sustancialmente los montos pecuniarios demandados.



Foja: 1

Además de lo alegado, sostiene que los reajustes sólo pueden devengarse en el caso de que la sentencia que se dicte en la causa acoja la demanda y establezca esa obligación, y además desde que dicha sentencia se encuentre firme o ejecutoriada.

Advierte, que a la fecha de interposición de la demanda de autos a tramitación, o de su notificación, y mientras no exista sentencia firme o ejecutoriada, ninguna obligación tiene el demandado de indemnizar, y por tanto no existe ninguna suma que deba reajustarse.

Señala, que lo anterior implica que, en casos como el de autos, los reajustes que procedieren de ninguna manera podrían contabilizarse desde una fecha anterior a aquella en que la sentencia que los concede se encuentre firme o ejecutoriada.

Indica, que el reajuste es un mecanismo económico-financiero que tiene por objeto neutralizar el efecto que los procesos inflacionarios o deflacionarios tienen sobre la moneda de curso legal. Desde esta perspectiva, no procede aplicar la corrección monetaria a partir de una fecha anterior a la determinación del monto respectivo por sentencia ejecutoriada.

Respecto de los intereses, el artículo 1551 del Código Civil establece expresamente que el deudor no está en mora sino cuando ha sido judicialmente reconvenido y ha retardado el cumplimiento de la sentencia.

Por consiguiente, en el hipotético caso de que el Tribunal decida acoger la acción de autos y condene al demandado al pago de una indemnización de perjuicios, tales reajustes e intereses sólo podrán devengarse desde que la sentencia condenatoria se encuentre firme o ejecutoriada y su representado incurra en mora.

Previa invocación de jurisprudencia y disposiciones legales que estima pertinentes, solicita tener por contestada la demanda civil deducida en autos y, en definitiva, conforme a las excepciones, defensas y alegaciones opuestas, rechazar dicha acción indemnizatoria en todas sus partes, con costas; o, en subsidio, rebajar sustancialmente los montos indemnizatorios pretendidos, teniendo presente lo alegado respecto de los reajustes e intereses y eximirlos a todo evento de una eventual condena en costas.

**TERCERO:** Que, el demandante evacuó la réplica, reiterando todos los fundamentos de hecho y derecho expuestos en la demanda, y solicitando el rechazo absoluto de todas las excepciones, defensas y alegaciones contenidas en la contestación.



Foja: 1

Advierte, que el Fisco de Chile, no ha controvertido la condición de víctima de la demandante, ni la exposición de hechos contenidos en la demanda, que dan cuenta del secuestro, prisión política y torturas sufridos por los demandantes; ni la calidad de víctima calificada por la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, por los hechos relatados en la demanda.

Hace presente, que la demandada tampoco ha cuestionado la existencia del daño ocasionado producto de estos crímenes, limitándose a formular excepciones.

En cuanto a la alegación que hace el demandado consistente en aplicar el modo de extinguir las obligaciones “excepción de pago” o, en sus términos “reparación satisfactiva o integral”, en consideración a que la demandante ya habría sido indemnizada por la Ley N° 19.123, así como por los beneficios recibidos por otras normas como la Ley N° 19.992; comenta que esta afirmación les parece equivocada.

Indica, que lo enunciado en la contestación por la contraria, en el mejor de los casos, sólo establece pensiones de sobrevivencia por los brutales actos de tortura de que fueron víctimas las personas. Expresa, que pretender que una pensión que bordea los \$170.000, definida por el propio Estado como “austera y simbólica”, es la reparación que mandata el Derecho internacional, carece de cualquier asidero. Controvierte aquella afirmación que señala que el proceso de justicia transicional chileno ha “cumplido con todos los estándares de Justicia Transicional”. Detalla, que en el cuerpo de la demanda han enunciado varios de esos estándares y fuentes que dan cuenta de la situación opuesta, como son los informes del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas en su revisión a nuestro país, la Observación General N° 13 del mismo Comité, referida al artículo 14 de la Convención contra la tortura (Derecho a la reparación), así como sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que explicitan la obligación de reparar el daño específico. Por lo demás, la insuficiencia de estas reparaciones estatales puede establecerse comparándolas con el ingreso mínimo que existe en Chile, o bien considerando que en los últimos años han sido frecuentes las huelgas de hambre protagonizadas por Ex Presos Políticos denunciando las paupérrimas pensiones que reciben, considerando además su edad avanzada. Son, en efecto, apenas pensiones de sobrevivencia por los brutales actos cometidos por el Estado entre los años 1973 y 1990.

Asegura, que las mismas en ningún caso reparan íntegramente el dolor experimentado por los demandantes.



Foja: 1

Hace presente que el Fisco de Chile reconoce que se produjeron crímenes contra la humanidad y que los mismos causaron un daño moral a la víctima directa que demanda. Añade, que existe un reconocimiento implícito y explícito de la responsabilidad que le cabe al Estado de Chile. De este modo, incluso si entendiéramos que esta acción humanitaria y propia del Derecho internacional pudiera prescribir, este reconocimiento continuo de responsabilidad, extinguiría cualquier prescripción.

Señala, que reconocer el deber de indemnizar, argumentar que los beneficios asistenciales realizados son una forma de pago, y a la vez alegar prescripción, es un contrasentido.

En cuanto a la Ley N° 19.123, que el demandado esgrime como justificación para decir que el daño moral ya está resarcido, en su artículo 2° establece que *“Le corresponderá especialmente a la Corporación (...) Promover la reparación del daño moral de las víctimas”*. Expresa, que la palabra promover no es sinónimo de reparar, y opina, que en el caso del demandante, no se ha reparado íntegramente el daño moral que padece hasta el día de hoy por las brutales torturas padecidas. Detalla, que el sentimiento de injusticia y de no haber sido reparada totalmente subsiste intacto. Asegura, que la Ley N°19.123, no considera incompatibles la pensión de sobrevivencia con una eventual indemnización de perjuicios que repare el daño moral, según el tenor inequívoco de su artículo 24: *“La pensión de reparación puede ser compatible con cualquiera otra, de cualquier carácter, de que goce o pudiere corresponder al respectivo beneficiario”*.

Sostiene, que no existe incompatibilidad alguna entre ser beneficiario de una pensión austera y simbólica, igual para todas las víctimas reconocidas, que demandar por daños en sede civil por el daño concretamente sufrido. Por esto, es improcedente la alegación de excepción de reparación integral o de pago que ha hecho valer el demandado.

Agrega, que la conclusión de la defensa fiscal, pugna también con el artículo 76 de la Constitución Política, pues su resultado práctico sería que los tribunales de justicia no tendrían la facultad de conocer y resolver esta controversia.

Argumenta, que basarse en la ley 19.123 y especialmente en la Ley 19.992 y sus modificaciones sobre prisioneros y torturados políticos, para decir que el daño moral ya está reparado, llevaría necesariamente a la conclusión de que el Congreso de Chile estaría avocándose al conocimiento y resolución de una causa



Foja: 1

judicial pendiente, y advierte, que aquello es abiertamente inconstitucional. Agrega, que si se aceptara la tesis Fiscal, el monto de la reparación que han recibido las víctimas estaría fijado de forma unilateral y absolutamente arbitraria por el Estado.

Afirma, que es improcedente la excepción de prescripción extintiva.

Relata, que alguna vez existió un debate dogmático sobre la naturaleza de la responsabilidad del Estado y el estatuto jurídico aplicable a la reparación por crímenes de lesa humanidad, indica, que sin embargo, el mismo se ha inclinado en los últimos años a favor de la imprescriptibilidad de las acciones reparatorias derivadas de crímenes de lesa humanidad.

Afirma, que la defensa fiscal que pretende la aplicación de las normas de título XXXV del Libro IV del Código Civil y las reglas referidas a la prescripción extintiva, resulta impertinente.

Comenta, que en un Estado constitucional de Derecho, el principio de responsabilidad es parte de la esencia del mismo. La irresponsabilidad por actos del Estado es característica de regímenes absolutos, despóticos o autoritarios. Los daños que causa un Estado, más aún aquellos provocados intencionalmente, son hechos ilícitos que generan responsabilidad, lo cual es un principio del Derecho aceptado por las naciones civilizadas, en los términos de la Corte Internacional de Justicia.

Con estos antecedentes, solicitan rechazar las peticiones del demandado.

Respecto a la Jurisprudencia de la Excm. Corte Suprema de Justicia, menciona, que la más reciente jurisprudencia del máximo tribunal de la República, en coincidencia con el Derecho internacional de los Derechos Humanos, ha variado el criterio reconociendo el carácter de imprescriptibles a las acciones civiles o reparatorias que derivan de los crímenes de lesa humanidad atentatorios contra los Derechos Humanos, concediendo así la correspondiente indemnización.

Advierte, que el mismo principio ha sido reconocido, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional, que además de buscar sancionar la responsabilidad penal de los más altos responsables, conoce también de la reparación por crímenes contra el Derecho Internacional conforme el artículo 75 del Estatuto de Roma.



Foja: 1

Sobre el monto de lo demandado, indica que la normativa vigente exige presentar peticiones concretas. Expresa, que no hay dinero que supla el dolor experimentado por el demandante. Señala, que en la parte petitoria de la demanda solicitaron, en subsidio, que se condene a *“la suma que US. Determine conforme a derecho...”*, conforme el mérito de autos.

Respecto a la procedencia del cobro de reajustes, argumenta, que la reajustabilidad, está ligada a la garantía de la reparación integral o plena, y del pago efectivo de las obligaciones. La desvalorización monetaria es algo que afecta a cualquier tipo de indemnización, por lo cual, es necesario acudir a un índice de reajustabilidad como es el Índice de Precios del Consumidor (IPC). Respecto de los intereses, indica, que afirma en doctrina el profesor José Luis Diez Schwerter *“que hoy existe una tendencia jurisprudencial asentada en que para dar cumplimiento al principio de la reparación integral, es menester que a la víctima no solo se le concedan reajustes sobre las sumas fijadas como indemnización, sino además intereses”*.

Prevía invocación de disposiciones legales, jurisprudencia y doctrina que estima pertinentes, solicita tener por evacuada la réplica en los términos expresados precedentemente, solicitando desde ya el rechazo absoluto de todas y cada una de las excepciones, defensas y alegaciones opuestas a la demanda; con costas.

**CUARTO:** Que, el demandado evacuó la dúplica ratificando, en primer lugar, la totalidad de las argumentaciones expresadas en la contestación de la demanda de autos.

En cuanto a la excepción de cosa juzgada, indica, que existe sentencia definitiva ejecutoriada en la materia, respecto del actor Segundo Omar Cartes Suazo, por haber ejercido anteriormente esta misma acción indemnizatoria.

Afirma, que este demandante ya ejerció una acción por estos mismos hechos, habiéndose dictado sentencia ejecutoriada. Menciona, que don Segundo Cartes Suazo, ya demandó al Fisco por indemnización de perjuicios por la detención ilegal y apremios que habría sufrido, en la causa caratulada “Salgado Salgado y Otros con Fisco de Chile”, del 14º Juzgado Civil de Santiago; Rol: C-1890-2006, dictándose en esos autos, sentencia definitiva que rechazó la demanda por acoger la excepción de prescripción de la acción de indemnización de perjuicios, la cual fue confirmada por la I. Corte de Apelaciones de Santiago y rechazada la casación en el fondo deducida en su contra, encontrándose firme y ejecutoriada.



Foja: 1

Advierte, que el demandante en su escrito de réplica no hizo ninguna alusión a esta excepción.

Respecto de la supuesta aceptación de los hechos, niega que aquello sea efectivo.

Comenta, que controvierte expresamente los hechos, señalando que los demandantes por repercusión no han sido reconocidos por las comisiones Valech I ni II como víctimas de prisión política y torturas. Añade, que no es efectivo que el daño no requiera ser probado en juicio, como lo señalan los actores en su demanda y réplica; no es posible inferirlo, más aún, cuando los demandantes no detentan la calidad de víctimas de prisión política y torturas.

Hace presente, que en su réplica, los demandantes no realizan defensa alguna respecto a la falta de legitimación activa alegada respecto de los familiares del primer demandante; por lo que en consecuencia, reiteran lo señalado a propósito de dicha excepción, pues es la víctima directa quien tiene la titularidad de la acción por los hechos que personalmente sufrió, sin que la presente acción se extienda a favor de terceros que no fueron las víctimas de prisión política y torturas.

Agrega, que el daño, para ser indemnizado debe ser personal, actual, real y cierto, lo que significa que sólo quien lo ha sufrido puede demandar su reparación. Si bien el daño reflejo o por repercusión, se puede considerar un daño personal, este sólo puede ser indemnizado cuando esté dentro de ciertos límites. Asegura, que la acción de autos queda fuera de ellos, pues extender el daño moral por repercusión a extremos tales como los descritos en esta demanda, ocurridos por lo demás hace décadas, genera un injusto que afecta a la legitimidad del interés protegido con la responsabilidad civil.

En cuanto a la excepción de que la indemnización demandada resulta improcedente por limitación de la justicia transicional, advierte que respecto de dicha argumentación los actores tampoco se pronuncian en su réplica.

En consecuencia, reitera que en dicho contexto, se determinó una indemnización legal que optó por beneficiar a la víctima de prisión política y tortura, pretiriendo al resto de las personas ligadas por vínculos de parentesco o de amistad y cercanía, quienes fueron excluidas, sin perjuicio de otras reparaciones satisfactivas a éstos últimos, los que, no obstante haber sido descartados como titulares de pagos





Foja: 1

directos en dinero, se les consideró en diversos desagravios de carácter simbólico y en programas, especialmente de salud, para reparar el daño moral.

Menciona, que ello no es ajeno a otras normativas, en que, ante el pretium doloris, está limitada la determinación de quienes son los sujetos de daño por repercusión o rebote para deducir acciones pecuniarias, pues la extensión de la reparación económica debe zanjarse en algún punto, todo ello, sin perjuicio de las reparaciones simbólicas detalladas que los benefician.

En relación con el demandante principal y víctima directa don Segundo Cartes Suazo, alega la excepción de reparación satisfactiva, expresando que el daño moral cuya indemnización demanda en estos autos ya ha sido indemnizado. Argumenta, que debido a ello procede se haga lugar a la excepción alegada.

En cuanto a la excepción de prescripción, agrega que, en tanto los demandantes cónyuge e hijos del demandante principal no son víctimas de violaciones a los derechos humanos, no estamos en presencia de crímenes de lesa humanidad, resultando incuestionablemente aplicable la institución de la prescripción.

Respecto a la excepción de prescripción opuesta contra la acción deducida por don Segundo Cartes Suazo, reitera la importancia de la sentencia de unificación de jurisprudencia dictada por el Pleno de la Excma. Corte Suprema con fecha 21 de enero de 2013 en los autos rol 10.665-2011 “Episodio Colegio Médico Eduardo González Galeno”.

Sostiene, que en esta materia se aplica el artículo 2332 del Código Civil que dispone un plazo de cuatro años en la cual prescribe la acción por responsabilidad extracontractual en contra del Estado. La aplicación de esta norma está regulada en el artículo 2497 del mismo cuerpo legal, que señala expresamente que las normas de prescripción se aplican “a favor y en contra del Estado”.

Asegura, que la Excma. Corte ha dejado claramente establecido que los tratados internacionales sobre derechos humanos no impiden en modo alguno la aplicación del derecho interno, específicamente las normas sobre prescripción de la acción civil.

Prevía invocación de jurisprudencia que estima pertinente, solicita tener por evacuada la dúplica, y en su mérito, rechazar la demanda de autos.

**QUINTO:** Que para acreditar sus dichos, la demandante acompañó en autos:

**Prueba Documental:**



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: MXTXLGRXKL

Foja: 1

Al folio 1:

1.- Copia Digital de Nómina de casos de Detenidos/as Desaparecidos/as y Ejecutados/ as Políticos Reconocidos/ as por la Comisión Valech I, donde se ve reflejado el demandante bajo el número 4861 de dicha lista.

2.- Copia digital de Certificado de Matrimonio entre don Segundo Omar Cartes Suazo y doña Maaly Mercedes Espinoza Aguilera, que acredita su calidad de cónyuges, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile.

3. - Copia digital de Certificado de Nacimiento de doña Claudia Ivana Cartes Espinoza, que acredita su calidad de hija de don Segundo Omar Cartes Suazo, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile.

Al folio 20:

1.- Copia digital timbrada de carpeta confidencial del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) correspondiente al demandante principal de autos don Segundo Omar Cartes Suazo, cédula nacional de identidad número 5.490.596-3, donde se acredita su calidad de víctima de violaciones de derechos humanos por parte del demandado de autos, Estado de Chile.

Al folio 22:

1.- Fallo de casación en Episodio “Comando Conjunto, víctimas: Salinas, Pacheco y Gianelli”. Rol N° 5831-2013.

2.- Fallo de casación en Episodio “Torres de San Borja”, víctimas: Montecinos Slaughter, Adler Zulueta, Díaz Agüero, y otros. Rol N° 2918-2013.

3.- Fallo causa “Marcone con Fisco de Chile”, Rol 22856-2015, de fecha 29 de Diciembre de 2015

4.- Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de fecha 29 de noviembre de 2018, en causa caratulada “Órdenes Guerra y otros vs Chile”, Rol CDH-2-2017.

5.- Sentencia de la Excma. Corte Suprema, Rol N° 1092-15, dictada el día 14 de septiembre de 2015.

6. Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (VALECH). Reflexiones y Propuestas de S.E. el Presidente de la República, Ricardo Lagos Escobar; págs. 5 a la 10, inclusive.



Foja: 1

7. Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (VALECH)  
Capítulo V.

8. Copia digital de Estudio sobre Transgeneracionalidad del daño, elaborado por el Psicólogo don Freddy Silva Gallardo, coordinador de equipo especializado de PRAIS, Servicio de Salud Aconcagua, de fecha 16 de octubre del 2017.

9. Copia de la página N° 130, del Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura, que da cuenta de haberse acreditado por el Estado de Chile la calidad de torturado del demandante don Segundo Omar Cartes Suazo, cédula nacional de identidad número 5.490.596-3, Registro de Torturados N.º 4861.

Al folio 24:

1. Informe Psicológico sobre los efectos de la prisión política y tortura padecida por el demandante de autos, Segundo Omar Cartes Suazo elaborado y suscrito por la Psicóloga Clínica doña Massiel Nicole Cerna Cuevas, con fecha 12 de abril del año 2023.

2. Informe Psicológico sobre los efectos de la prisión política y tortura padecida por el demandante principal de autos, Segundo Omar Cartes Suazo y como ésta afecto a su esposa, demandante por repercusión doña Maaly Mercedes Espinoza Aguilera, elaborado y suscrito por la Psicóloga Clínica doña Massiel Nicole Cerna Cuevas, con fecha 12 de abril del año 2023.

3. Informe Psicológico sobre los efectos de la prisión política y tortura padecida por el demandante principal de autos, Segundo Omar Cartes Suazo y como ésta afecto a su hija, demandante por repercusión doña Claudia Ivana Cartes Espinoza elaborado y suscrito por la Psicóloga Clínica doña Massiel Nicole Cerna Cuevas, con fecha 18 de abril del año 2023.

4. Copia de declaración jurada de la Psicóloga Massiel Nicole Cerna Cuevas, certificada ante Notario Público de Chillan don Luis Eduardo Alvarez en fecha 28 de abril del año 2023, en el que los comparecientes Ratifican todo el contenido en el Informe Psicológico realizado a los demandantes: don Segundo Omar Cartes Suazo; doña Maaly Mercedes Espinoza Aguilera; doña Claudia Ivana Cartes Espinoza y reconoce la firma puesta al final del informe como propia.

5. Copia digital de certificado de título de la psicóloga particular doña Massiel Nicole Cerna Cuevas.

**SEXTO:** Que, la parte demandada acompañó los siguientes documentos:



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: MXTXLGRXKL

Foja: 1

Al folio 10:

1.- Copia de la demanda, de la sentencia de primera instancia y su complemento, sentencia de segunda instancia y del fallo de casación dictado por la Excma. Corte Suprema en recurso de casación en la causa seguida ante el 14° Juzgado Civil de Santiago, bajo el rol N° C-1890-2006, caratulada “Salgado y otros con Fisco de Chile”, sobre indemnización de perjuicios por daño moral.

Al folio 34:

1.- Oficio ORD. DSGT N° 4792-11850 de fecha 10 de febrero de 2023 del Instituto de Previsión Social (IPS) por el que informa los beneficios de reparación recibidos por el demandante (con el N° 2) don Segundo Omar Cartes Suazo, cédula de identidad 5.490.596-3, especialmente en relación a las leyes 19.123, 19.234, 19.980, 19.992, 20.134 y 20.874.

Además solicitó oficio al Instituto de Previsión Social (IPS) a fin de que informe sobre todos los beneficios percibidos por don Segundo Omar Cartes Suazo, cédula de identidad 5.490.596-3, especialmente en relación con las leyes 19.123, 19.234, 19.992, 20.874, y demás pertinentes, quien señala ser víctima de detención, apremios ilegítimos y torturas; el que fue contestado al folio 16 y acompañado al folio 34.

**SÉPTIMO:** Que, el caso de autos, versa sobre la responsabilidad indemnizatoria que le cabría al Estado de Chile por la detención y tortura de don Segundo Omar Cartes Suazo.

Que, los documentos individualizados como “Copia Digital de Nómina de casos de Detenidos/as Desaparecidos/as y Ejecutados/ as Políticos Reconocidos/ as por la Comisión. Valech I”, donde se ve reflejado el demandante Segundo Omar Cartes Suazo, bajo el número 4861 de dicha lista; “Copia digital timbrada de carpeta confidencial del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH)”; y del oficio acompañado a folio 16, permiten tener por acreditado que Alfonso Enrique Apablaza Letelier, fue declarado por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, como víctima en el listado de prisioneros políticos y torturados, elaborado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, establecida por la Comisión Valech.

Además, caber señalar que la parte demandada no ha controvertido estas circunstancias, sino que ha centrado la controversia otros aspectos.



Foja: 1

**En cuanto a la excepción de cosa juzgada:**

**OCTAVO:** Que, el demandado opuso excepción de cosa juzgada contra don Segundo Omar Cartes Suazo, Rut 5.490.596-3, argumentando que ya habría ejercido una acción por estos mismos hechos.

Para acreditar sus asertos acompañó los documentos acompañados a folio 10.

**NOVENO:** Que, el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil dispone:

*“Art. 177 (200). La excepción de cosa juzgada puede alegarse por el litigante que haya obtenido en el juicio y por todos aquellos a quienes según la ley aprovecha el fallo, siempre que entre la nueva demanda y la anteriormente resuelta haya:*

*1° Identidad legal de personas;*

*2° Identidad de la cosa pedida; y*

*3° Identidad de la causa de pedir.*

*Se entiende por causa de pedir el fundamento inmediato del derecho deducido en juicio”.*

**DÉCIMO:** Que, para su procedencia, se requiere que exista la triple identidad copulativa de personas, objeto y causa de pedir, que la excepción en estudio se preocupa por resguardar.

Que en mérito de la prueba acompañada por el demandado, y en consideración a que el demandante don Segundo Omar Cartes Suazo, opuso demanda con fecha 16 de marzo de 2006, rechazándose con fecha 05 de julio de 2011; confirmándose por la Ilustrísima Corte de Apelaciones con fecha 10 de enero de 2014; y al rechazarse posteriormente el recurso de casación en el fondo; esta sentenciadora puede tener por acreditado que existe identidad de partes, de cosa perdida y de causa de pedir; por lo que existiendo triple identidad entre la presente causa y los autos Rol N°C-1890-2006, del 14° Juzgado Civil de Santiago, se procederá a acoger la excepción de Cosa Juzgada alegada, respecto del demandante don Segundo Omar Cartes Suazo, Rut 5.490.596-3, sin costas.

En cuanto a las demandantes Maaly Espinoza Aguilera y Claudia Cartes Espinoza, no existiendo identidad de partes, se rechazará la excepción de cosa juzgada respecto de estas.

**En cuanto a la falta de legitimidad activa:**



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: MXTXLGRXKL

Foja: 1

**UNDÉCIMO:** Que, la demandada niega la calidad de víctima respecto de las demandantes doña Maaly Mercedes Espinoza Aguilera, y doña Claudia Ivana Cartes Espinoza, alegando además la falta de legitimidad activa.

Que, corresponde tener presente que las demandantes señalan como fundamento de su pretensión indemnizatoria el daño reflejo o por repercusión sufridos por ellas, por hechos que afectaron al cónyuge y padre, don Segundo Omar Cartes Suazo, el que fue víctima de detención y tortura, lo cual habría afectado a todo su núcleo familiar; siendo por lo tanto, lo que alegan dichas demandantes, perjuicios propios y no el de la víctima inmediata.

Por otro lado, la demandada fundamenta su excepción en el hecho de que las demandantes referidas no se encuentran incluidas en la Nómina de personas reconocidas como víctimas por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Informe VALECH), sin embargo, cabe señalar que las demandantes doña Maaly Mercedes Espinoza Aguilera, y doña Claudia Ivana Cartes Espinoza, no indican lo contrario en su libelo.

Respecto a la excepción de falta de legitimidad, lo primero que habrá de decirse es que la acción, en el orden de los principios, es un derecho subjetivo autónomo dirigido a obtener una determinada resolución jurisdiccional, favorable a la petición del reclamante; de ahí que para que el actor triunfe en su demanda se requiere, primero, derecho, o sea, una norma de la ley que garantice al actor el bien que pretende; segundo, calidad, o sea, la identidad de la persona del actor con la persona favorecida por la ley y de la persona obligada con la del demandado; y tercero, interés de conseguir el bien mediante la intervención del órgano público.

Por consiguiente, corresponde al juez determinar en la sentencia si la situación concreta que la demanda plantea está amparada por una norma legal, sea en forma expresa o implícita, determinar si existe una norma abstracta que contemple la situación jurídica de que se trata, si el hecho que el actor invoca corresponde a la categoría de los que esa norma considera y si la existencia del hecho está justificada. La calidad de la acción dice relación con que ésta debe ser intentada por el titular del derecho y contra la persona obligada, es decir, las partes en la relación jurídica sustancial.

Ahora bien, la demostración de la existencia de la calidad invocada, que es activa cuando se refiere al actor y pasiva cuando se refiere al demandado, corresponde al actor, debiendo éste acreditar las condiciones de su acción, ya que a él incumbe



Foja: 1

demostrar su calidad de titular del derecho y la calidad de obligado del demandado.

La falta de esa calidad, sea porque no existe identidad entre la persona del actor y aquella a quien la acción está concedida, o entre la persona del demandado y aquella contra la cual se dirige, determina la procedencia de la defensa por falta de legitimidad.

Por consiguiente, la legitimación de la calidad de obrar no es un requisito para el ejercicio de la acción, sino para su admisión en la sentencia. Si de los antecedentes no resulta legitimación activa o pasiva, la sentencia rechazará la demanda, no porque ésta haya sido mal deducida, sino porque la acción no corresponde al actor o contra el demandado.

Finalmente, no puede tampoco olvidarse que para intentar una acción, así como para contradecirla, es necesario tener interés, porque sólo con esa condición se pone en juego la actividad jurisdiccional. Eso no impide que en ciertos casos se permita el ejercicio de la acción, aun cuando aparentemente no se descubra un interés inmediato; en efecto, el interés consiste únicamente en que, sin la intervención del órgano público, el actor sufriría un perjuicio. Por consiguiente, la cuestión de saber si media o no un interés justificado constituye una situación de hecho, debiendo el juez ampararlo (sentencia Excma. Corte Suprema, causa rol 5.242-2003).

**DUODÉCIMO:** Que, asentados los referidos principios doctrinarios, es de urgencia determinar si la acción de indemnización de perjuicios, consistente en el daño por repercusión, fue entablada por quien tenía derecho a ella y, en esa interrogante, cabe señalar que del libelo de las demandantes doña Maaly Mercedes Espinoza Aguilera, y doña Claudia Ivana Cartes Espinoza, se desprende que estas hacen consistir el daño por repercusión en el daño moral que le causó conocer y sufrir las consecuencias de la detención ilegal y torturas a que fue sometido su cónyuge y padre respectivamente.

En ese escenario fáctico, resulta claro que se trata, esencialmente, de los sufrimientos afectivos provenientes de la experimentación de las consecuencias de los padecimientos sufridos por una persona especialmente cercana y, por eso, la concesión de una compensación por estos daños reflejos suele proceder únicamente cuando los sufrimientos morales de la víctima por repercusión alcanzan una gravedad excepcional que supere la simple pena de ver sufrir a un ser querido.



Foja: 1

En este punto, el profesor Barros Bourie sostiene que *“superado el problema de su procedencia, los daños puramente afectivos plantean la cuestión de determinar los titulares de la acción: la lesión corporal de una persona puede producir aflicción en un amplio espectro de familiares y amigos. Aunque no existen reglas uniformes, la tendencia comparada es más bien a restringir el ámbito de los titulares de esta acción al círculo más cercano de la víctima, que sufren cotidianamente los padecimientos del ser querido y que, a la vez, contribuyen a su superación; aunque es una cuestión de hecho que debe probarse”* (Tratado de Responsabilidad Extracontractual, Enrique Barros Bourie, Editorial Jurídica de Chile, pag. 353)

Así las cosas, teniendo en consideración los hechos establecidos en el considerando séptimo, resulta que las demandadas doña Maaly Mercedes Espinoza Aguilera, y doña Claudia Ivana Cartes Espinoza, se encuentran legitimadas para interponer la acción de indemnización de perjuicios por el daño por repercusión alegado, según se desprende de los certificados de matrimonio y nacimiento acompañados al anexo de folio 1; los que acreditan el parentesco de las demandantes con don Segundo Omar Cartes Suazo, quien fue reconocido por el Estado de Chile como víctima de privación de libertad y torturas por razones políticas, en el informe de la Comisión Valech.

Cabe destacar, que dichos instrumentos son públicos, por lo que en conformidad a los artículos 1700 y 1706 del Código Civil, acredita que los demandantes se encuentren habilitados para interponer la presente acción. En efecto, los certificados emanados del Registro Civil, resultan idóneos para establecer los vínculos de parentesco, tal como lo expresa el profesor Enrique Barros Bourie, quien abordando este tema indica que nada impide que los herederos ejerzan las acciones iure proprio por los daños reflejos. (Tratado de Responsabilidad Extracontractual Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2006, páginas 945 y 946). (Corte suprema, 69831-2020)

Por estas consideraciones, no cabe sino rechazar la excepción en comento.

**En cuanto al fondo:**

**DÉCIMO TERCERO:** Que, habiéndose acogido la excepción de cosa jugada respecto del demandante don Segundo Omar Cartes Suazo, el caso de autos, versa sobre la responsabilidad indemnizatoria que le cabría al Estado de Chile por los presuntos daños a las demandantes doña Maaly Mercedes Espinoza Aguilera y doña Claudia Ivana Cartes Espinoza; ocasionadas por la detención de don





Foja: 1

Segundo Omar Cartes Suazo, la que ya se tuvo por acreditada en el considerando séptimo de este fallo.

Cabe reiterar, que la parte demandada no ha controvertido estas circunstancias.

**DÉCIMO CUARTO:** Que, de los párrafos reseñados en el considerando séptimo y décimo tercero, podemos concluir que estos hechos fueron cometidos por agentes del Estado, específicamente por órganos de seguridad del Estado de Chile, tal como da cuenta el informe acompañado al anexo de folio 20.

Asimismo, se tendrá presente que la responsabilidad del Estado, no ha sido discutida por las partes de este juicio, es más, la demandada alega expresamente que los demandantes, han sido reparados satisfactoriamente por el Estado por los delitos cometidos en contra de la víctima durante la época de la dictadura.

En consecuencia, se tendrá por acreditado que las detenciones y torturas de don Segundo Omar Cartes Suazo, ocurrieron en un contexto de violencia propia de aquella época, la que era practicada por agentes del Estado o civiles que actuaban por órdenes o bajo el amparo del régimen imperante, mediante prácticas graves y sistemáticas de violaciones a los derechos humanos con el único objetivo de exterminar y amedrentar -ya sea física y/o psicológicamente- a personas opositoras al régimen militar, como en el caso de marras.

Así lo expuesto, aparece clara la responsabilidad civil del Estado, que fluye de los hechos descritos y de la intervención de sus agentes, considerando en particular lo dispuesto en el inciso primero del artículo 6° de la Constitución Política de la República, en cuanto a que los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República, y en su inciso final, al señalar que la infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley; considerando además lo dispuesto en el artículo 4° del Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que señala que *“El Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado”*, responsabilidad que, en todo caso, no ha sido impugnada por la demandada.



Foja: 1

**DÉCIMO QUINTO:** Que, respecto a la excepción de improcedencia de las indemnizaciones dinerarias demandadas por la cónyuge e hija de la víctima directa; el demandado argumenta que la indemnización no puede alcanzar a las demandantes doña Maaly Mercedes Espinoza Aguilera y doña Claudia Ivana Cartes Espinoza; cónyuges e hijas respectivamente; en consideración que se determinó una indemnización legal, que optó por beneficiar a la víctima de prisión política y tortura, pretiriendo al resto de las personas ligadas por vínculos de parentesco o de amistad y cercanía, quienes fueron excluidas; a juicio de esta sentenciadora resultan inconsistentes los fundamentos de esa parte, toda vez que no existe norma alguna que excluya a los hijos y cónyuges, del derecho a obtener algún tipo de indemnización en sede judicial.

No es efectivo que nuestra legislación excluya la reparación a los parientes de las víctimas.

Cabe señalar, que cuando nuestro legislador ha querido establecer una prelación lo ha hecho expresamente, como por ejemplo en materia penal, o en materia de derecho sucesorio, o en la Ley N°16.744. Todo lo anterior, no ocurre en el caso de la indemnización de perjuicios por daño moral, menos aún en aquellas causas que se sustentan en crímenes de lesa humanidad.

A mayor abundamiento, la jurisprudencia de nuestros tribunales superiores tampoco ha hecho tal distinción, es así que un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, en esta misma materia, confirmó la indemnización de perjuicios, por el secuestro calificado de la hermana de los actores de aquella causa, cometidos por agentes del Estado (Sentencia Corte de Apelaciones de Santiago, Rol. Criminal N°: 1476-2014, de fecha cuatro de noviembre de 2014, considerando Décimo Sexto). En este mismo sentido, el fallo de la Corte Suprema que revocó la sentencia de segunda instancia, restableciendo la indemnización de perjuicios a favor de la querellante, quien era pariente por consanguinidad en cuarto grado en la línea colateral, es decir “primo” (Sentencia Corte Suprema, Rol N° 4300-2014, de fecha cuatro de septiembre de 2014, conocido como “Nilda Peña Solari”, parte resolutive).

Cabe citar también, un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, aún más reciente, de fecha 19 de octubre de 2016, dictada por la Duodécima Sala, que en lo pertinente señala:

*“CUARTO: Que, lo anterior significa que el daño moral ocasionado al hermano de la víctima no admite una negativa de entrada en virtud de eventuales omisiones*



Foja: 1

*que el legislador habría efectuado y que le afectarían, atendida una cierta lejanía que llevaría implícita la opción ejercida por éste en las leyes antes citadas. Se trata del daño moral causado por la muerte violenta generada por agentes del Estado en una persona con la cual existía un vínculo fraterno, esto es, con quien lo ligaba un parentesco de sangre por ser hijos de los mismos padres y con quien normalmente se creció, esto es, que fue gravitante en la propia formación de la personalidad del hermano sobreviviente.*

*Así las cosas, acreditado el vínculo, no se puede soslayar lo que aquello significa en términos de lo que ocurre con frecuencia y de allí surge la presunción que es posible construir a partir de dicho dato, con los caracteres de gravedad, precisión y concordancia que corresponde al proceso intelectual de valoración de la prueba, en términos tales que del certificado de nacimiento respectivo es posible acreditar el hecho base, del que es posible inferir la conclusión de que la forzada y violenta muerte de un hermano provoca un natural dolor, menoscabo, afectación, alteración de las condiciones normales de vida de quien tenía un vínculo fraterno que lo ligaba con la víctima. Y que no existe prueba que permita establecer que ocurrió algún suceso que hizo que los dos hermanos se hubiesen distanciado o hubiesen generado algún sentimiento de odiosidad, que tornara en irracional la conclusión que aquí se ha establecido.”*

Esta sentencia, cita un fallo de la Corte Suprema que resulta del todo pertinente citar también, a saber causa Rol N° 6686-2016 de fecha 21 de julio del corriente, la que en lo pertinente señala:

*“SEXTO: Que, de acuerdo a lo expuesto procede acoger el recurso en cuanto ataca la preterición legal de los actores –hermanos y tía de la víctima, adoptada sobre la base de una supuesta decisión del legislador que habría privilegiado el resarcimiento los familiares más próximos al afectado, ya que cada vez que se ha optado por establecer un orden legal respecto de beneficios o posibilidades de accionar existen disposiciones expresas que así lo resuelven, lo que en la especie no sucede, pues la única limitante que tienen quienes reclaman un daño sufrido como consecuencia del actuar de agentes del Estado es demostrar la existencia de dicho detrimento, de manera que formalmente basta con alegar su concurrencia y la relación con la víctima para plantear la pretensión, lo que en este caso está satisfecho”.*

Que, en atención a lo expuesto precedentemente y tal como se declarará en la parte resolutive de este fallo, se rechazará la alegación hecha por la demandada en cuanto a declarar la improcedencia de las indemnizaciones dinerarias de las



Foja: 1

demandantes doña Maaly Mercedes Espinoza Aguilera y doña Claudia Ivana Cartes Espinoza.

**DÉCIMO SEXTO:** Que, la parte demandada opuso también la excepción de existencia de reparación satisfactiva obtenida por los demandantes. Al respecto cabe tener presente que la Ley N° 19.123, que crea la Corporación Nacional de Reparación y Conciliación, establece una pensión de reparación y otorga otros beneficios en favor de las personas que ahí señala. Dicho cuerpo legal ha establecido medios voluntarios, a través de los cuales el Estado chileno ha intentado reparar los daños ocasionados a las personas declaradas víctimas de violaciones a los derechos humanos o de violencia política, pero sin que deba entenderse una incompatibilidad entre estos resarcimientos y aquellos que legítimamente y por la vía jurisdiccional pretendan las víctimas. El propio artículo 4° de la citada ley dispone que *“en caso alguno la Corporación podrá asumir funciones jurisdiccionales propias de los Tribunales de Justicia ni interferir en procesos pendientes ante ellos. No podrá, en consecuencia, pronunciarse sobre la responsabilidad que, con arreglo a las leyes, pudiere haber a personas individuales”*, lo que deja de manifiesto el pleno resguardo a la garantía constitucional de acudir a los tribunales de justicia cuando se estime que existe un daño que no ha sido reparado íntegramente.

Asimismo, la citada ley en parte alguna estableció una incompatibilidad entre los beneficios que otorga e indemnizaciones de perjuicios establecidas en sede judicial, no existiendo motivo alguno ni siendo facultad de esta sentenciadora para presumir que dicho estatuto se dictó con el ánimo de indemnizar todo daño moral sufrido por las víctimas de derechos humanos.

A mayor abundamiento, los medios voluntarios asumidos por el Estado y fijados en la ley singularizada, en modo alguno importan una renuncia o prohibición para que las víctimas acudan a la sede jurisdiccional a fin que ésta, por los medios que autoriza la ley, declare la procedencia de una reparación por daño moral.

En consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, los beneficios establecidos en la Ley N° 19.123 y N° 19.980 no resultan incompatibles con la reparación material del daño moral.

Este mismo criterio es el que ha establecido la Corte Suprema en diversos fallos, indicando incluso que las fuentes que dan origen a la indemnización por daño moral y los beneficios establecidos por la Ley N°19.123 provienen de fuentes distintas. Es así, que la indemnización encuentra su fuente en el derecho



Foja: 1

internacional por la demanda que se hace al Estado en la aplicación de buena fe de los tratados internacionales suscritos así como la interpretación de las disposiciones de derecho internacional que conforman el ius cogens que tiene plena aplicación en virtud del artículo 5° de la Constitución Política del Estado, a diferencia de la norma legal interna citada. Indica que el espíritu de la Ley N° 19.123 al establecer beneficios relacionados con los compromisos adquiridos por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación no pueden confundirse con aquellas que emanan del Derecho Internacional que imponen la obligación de reparación íntegra. Refiere que la citada ley no establece la incompatibilidad reclamada por el Fisco, como tampoco importa una renuncia de una de las partes o la prohibición para que el sistema jurisdiccional declare su procedencia. Por último agrega que los beneficios establecidos en el cuerpo legal no resultan incompatibles con la reparación material del daño moral sufrido por las víctimas (Sentencia Corte Suprema, Rol N° 1424-2013, “Episodio Tejas Verdes”, considerando décimo tercero).

**DÉCIMO SÉPTIMO:** Que, a fin de zanjar la discusión anterior, el hecho que las demandantes sean beneficiarios de un sistema de previsión de salud especial, de gestos simbólicos u otras medidas análogas, no es en caso alguno incompatible con la obtención de indemnizaciones pecuniarias por los graves hechos cometidos de los cuales han sido víctimas directa o indirectamente.

A mayor abundamiento, no hay prueba alguna acompañada en el presente procedimiento que acredite que doña Maaly Mercedes Espinoza Aguilera y doña Claudia Ivana Cartes Espinoza, reciban algún beneficio pecuniario.

Cabe hacer presente además, y como es de público conocimiento, que muchos de los “gestos simbólicos” como señala la demandada en su escrito de contestación han sido realizados, organizados y financiados por particulares y organizaciones no gubernamentales, en los cuales el Estado ha participado de manera tangencial o derechamente no lo ha hecho.

Es por lo anteriormente expuesto que se rechazará la excepción alegada de reparación satisfactiva y reparación integral, ya obtenidas por los demandantes.

**DÉCIMO OCTAVO:** Que, respecto a las alegaciones efectuadas por la parte demandada en cuanto a que la acción civil se encontraría prescrita, ya sea por la fecha en que ocurrieron los hechos, o por la fecha de retorno a la democracia, por lo que han transcurrido con creces los plazos para ejercer la acción civil; se deben tener presente una serie de elementos facticos y jurídicos.



Foja: 1

En primer lugar, y como ya se ha señalado reiteradamente en esta sentencia, nos encontramos frente a crímenes de lesa humanidad, tal y como lo establecen los respectivos convenios e instrumentos de derecho internacional de los derechos humanos, toda vez que estos hechos ocurrieron en un contexto de excepción, período en que se violaron de manera grave, sistemática y masivamente los derechos humanos de las personas oponentes al régimen de entonces o con simples fines de amedrentamiento de la población civil, todo ello cometido por agentes del Estado o por civiles amparados por éste.

Considerando la conclusión del párrafo precedente, corresponde determinar si estos son prescriptibles o no, teniendo presente que partiremos enfocándonos en la acción penal. Así, uno de los elementos más característicos de los crímenes de lesa humanidad es justamente su imprescriptibilidad, pues así se establece, por ejemplo, en la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad de fecha 26 de noviembre de 1968, específicamente en su artículo I letra b), el que señala que *“Los crímenes siguientes son imprescriptibles, (...) b) Los crímenes de lesa humanidad cometidos tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz...”* y en el artículo 3° del Estatuto del Tribunal Internacional para Ruanda de 1994. Si bien la Convención no se encuentra ratificada por nuestro país, las normas y especialmente los principios contenidos en el instrumento internacional, sin lugar a dudas se elevan a la categoría de ius cogens, la que sí tiene plena aplicación en nuestro derecho interno. Así también lo ha establecido la jurisprudencia de nuestra Excelentísima Corte Suprema en fallos recientes, como son en causa Rol N° 1424-2013, denominado “Episodio Tejas Verdes” de fecha uno de abril de 2014, en sus considerandos sexto al décimo quinto; la causa Rol N° 4300-2014, denominado “Episodio Nilda Peña Solari” de fecha cuatro de septiembre de 2014, en sus considerandos octavo al décimo tercero; y la causa Rol N° 21.177-2014, denominado “Episodio Villa Grimaldi”, caratulados “Ramón Martínez González”, de fecha diez de noviembre de 2014, en sus considerandos décimo cuarto al décimo octavo, solo por citar algunos.

En consecuencia, habiéndose determinado que la acción penal en materia de crímenes de lesa humanidad resulta imprescriptible, es necesario establecer si en el caso de marras la acción civil que deriva de estos hechos punibles también resulta imprescriptibles o si por el contrario debe aplicarse las reglas generales de prescripción del Código Civil.



Foja: 1

Es así, que teniendo claro que la presente acción civil deriva justamente de hechos tipificados como crímenes de lesa humanidad los cuales no prescriben, resultaría incoherente entender que la presente acción indemnizatoria, si esté sujeta a normas de prescripción, siendo contrario ello a los principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que establecen la obligación permanente del Estado de reparar a las víctimas de estos crímenes considerados de los más atroces, tal como se establece en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de fecha 23 de marzo de 1976, Parte III, artículo 9, y la Resolución Aprobada 56/83 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de fecha 28 de enero 2002, sobre Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos; y teniendo presente especialmente que ambas acciones se sustentan en el mismo hecho ilícito. Así lo ha resuelto la Corte Suprema, en reiterados fallos, como por ejemplo en la sentencia de reemplazo en causa Rol. N° 4300-2014, de fecha cuatro de septiembre de 2014, denominado “Episodio Nilda Peña Solari” (considerando Segundo), de igual forma en causa Rol. N° 1424-2013, de fecha uno de abril de 2014, denominado como “Episodio Tejas Verdes” (considerando Undécimo, segundo párrafo), en la cual se establece claramente que la acción civil es imprescriptible. A mayor abundamiento señala el citado fallo:

*“... Por consiguiente, cualquier diferenciación efectuada por el juez, en orden a dividir ambas acciones y otorgarles un tratamiento diferenciado, es discriminatorio y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia y unidad que se le reclama...”*

Misma conclusión ha llegado la Corte de Apelaciones de Santiago, por ejemplo en sentencia causa Rol. N° 1476-2014, de fecha cuatro de noviembre de 2014 (considerando Décimo Cuarto), la que señala en lo relativo a la acción civil que al igual que la acción penal, ésta:

*“... es imprescriptible porque se sustenta en una conducta ilícita de agentes del Estado... calificándose el delito de lesa humanidad”.*

Debe tenerse presente además, que no estamos frente a una acción de indemnización de perjuicios común, que derive de relaciones privadas contractuales o extracontractuales propias del derecho interno, sino que nos encontramos ante una acción que se sustenta en situaciones de carácter humanitaria y que por lo tanto debe sujetarse a normas y principios y las reglas internacionales que conforman el ius cogens, propias del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.



Foja: 1

De acoger la tesis planteada por la demandada en este punto, resultaría una grave infracción a las obligaciones internacionales que ha contraído nuestro Estado, por cuanto ha ratificado la Convención de Viena en 1980, la que en su artículo 27 establece que un Estado no puede invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales, como por ejemplo -y como se ha venido señalando- la de reparación, norma que por lo demás, según nuestro ordenamiento interno tiene rango constitucional de acuerdo al artículo 5° de la Constitución Política del Estado, por lo que contrariar la norma mencionada, sería incluso infringir a nuestro propio sistema jurídico.

Cabe señalar también, que la Convención Americana sobre Derechos Humanos o “Pacto de San José de Costa Rica”, ratificada por Chile y vigente, dispone en su artículo 63.1 que *“cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”*, lo que se traduce en una obligación constitucional para el Estado chileno, de indemnizar por la perpetración de crímenes de lesa humanidad, incorporada a nuestro derecho interno por mandato del artículo 5° de la carta política, sin que sea posible estimar, como pretende la demandada, que dicha instrucción indemnizatoria está dirigida exclusivamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y no a nuestros tribunales de justicia, aserto que importaría desdeñar preceptos constitucionales.

Es así, que los artículos 2332 y 2515 del Código Civil, si bien también se aplican a favor del Estado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2497 del mismo cuerpo legal, no resultan aplicables en esta materia, por ser abiertamente contrarias a las normas internacionales de Derechos Humanos ya mencionadas, que establecen un carácter unitario de las acciones penales y civiles emanados de delitos de lesa humanidad.

Que, la acción resarcitoria que nace de la comisión de delitos de lesa humanidad es tan imprescriptible como la acción para exigir del Estado la investigación y sanción de dichos delitos; de modo que siendo el hecho generador del daño que se invoca, violaciones de derechos humanos, no resultan atingentes las normas del derecho interno previstas en el Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles resarcitorias comunes, ya que existe un estatuto normativo internacional que ha sido reconocido por nuestro país al efecto.





Foja: 1

Así las cosas, esta sentenciadora y teniendo presente las normas ya referidas y por los fundamentos antes expuestos, rechazará tanto la alegación principal como la subsidiaria en cuanto a declarar cualquiera de las prescripciones de la acción civil que da origen a estos autos, respecto de las demandantes Maaly Mercedes Espinoza Aguilera y doña Claudia Ivana Cartes Espinoza, declarando expresamente para los efectos de la presente sentencia, que la acción civil emanada de un acción penal de tipo imprescriptible por crímenes de lesa humanidad, también es imprescriptible.

Que en nada afecta lo resuelto, la defensa del demandado, respecto a la cónyuge e hija de la víctima directa; toda vez que los hechos que fundamentan la pretensión de estos, se basan en violaciones a los derechos humanos.

En cuanto al demandante don Segundo Omar Cartes Suazo, habiéndose acogido la excepción de cosa juzgada, se omitirá pronunciamiento al respecto.

**DÉCIMO NOVENO:** Que, entrando al fondo de la acción deducida, y teniendo responsabilidad civil el Estado, según se explicó en los considerandos precedentes de esta sentencia, habiéndose además declarado la compatibilidad entre la indemnización de perjuicios por daño moral y las prestaciones que otorga la Ley N° 19.123 y N° 19.980 y las reparaciones simbólicas, en el caso que el demandante fuera beneficiario de ellas, y declarada la imprescriptibilidad de la acción de perjuicios por la comisión de crímenes de lesa humanidad, corresponde analizar la procedencia de indemnizar a los demandantes, por el daño moral con ocasión de las detenciones y torturas de don Segundo Omar Cartes Suazo, cometido por agentes del Estado, y en la afirmativa, fijar la cuantía de las indemnizaciones de las demandantes por repercusión, refiriéndose de paso a las excepciones relativas al monto y naturaleza de la indemnización e improcedencia del pago de reajustes en la forma solicitada por el actor, opuesta por la demandada.

Debe tenerse presente que el daño moral, es definido como el detrimento, angustia, dolor sufrimiento, aflicción o menoscabo o trastorno psicológico, afección espiritual o lesión de un interés personalísimo, causado a la espiritualidad de la víctima como consecuencia de la comisión de un hecho ilícito o de la infracción a un derecho subjetivo, no definible por parámetros objetivos, que puede afectar a la víctima o a un tercero, pudiendo consistir en daño moral puro o bien de índole pecuniario cuando indirectamente afecta la capacidad productiva del perjudicado.



Foja: 1

Así también, en reiterada jurisprudencia, la Corte Suprema ha definido el daño moral como la lesión efectuada culpable o dolosamente, que significa molestias en la seguridad personal del afectado, en el goce de sus bienes o en un agravio a sus afecciones legítimas, de un derecho subjetivo de carácter inmaterial e inherente a la persona e imputable a otra.

**VIGÉSIMO:** Que, en prueba de sus alegaciones, las demandantes doña Maaly Mercedes Espinoza Aguilera y doña Claudia Ivana Cartes Espinoza acompañaron al anexo de folio 1, certificados de nacimiento que acreditan el parentesco con don Segundo Omar Cartes Suazo.

En cuanto a los informes psicológicos acompañados al anexo de folio 24, estos emanan de un tercero, que no compareció a juicio a reconocer el documento, por lo que se omitirá pronunciamiento. Que en nada alteran lo resuelto, el certificado de título, ni la declaración jurada acompañados al anexo de folio 24, ya que el artículo 346 N°2 del Código de Procedimiento Civil, exige que el reconocimiento se haya hecho en un instrumento público, circunstancia que no se observa en autos.

**VIGÉSIMO PRIMERO:** Que, de las probanzas descritas, aparece clara la responsabilidad civil del Estado respecto a los hechos sufridos por la víctima directa, que fluye de los hechos narrados y del reconocimiento de la intervención de sus agentes, considerando en particular lo dispuesto en el inciso primero del artículo 6° de la Constitución Política de la República, en cuanto los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella y garantizar el orden institucional de la República, y en su inciso final, al señalar que la infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley; teniendo presente además, lo dispuesto en el artículo 4° del Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.653 de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que señala que: *“El Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado”*, responsabilidad que, en todo caso, no ha sido impugnada por la demandada.

**VIGÉSIMO SEGUNDO:** Que, respecto del demandante por repercusión, se debe tener presente que para acceder a una indemnización de perjuicios, en el caso particular por daño moral, se deben cumplir ciertos requisitos que la haga procedente.



Foja: 1

La doctrina y la jurisprudencia coinciden en señalar como uno de los requisitos que deben concurrir es el de nexo causal, vale decir la relación de causalidad existente entre el hecho dañoso y el daño que se alega. La Corte Suprema ha dicho que *“la relación de causalidad no está definida por el legislador, por lo que debe entenderse en su sentido natural y obvio... Entre un acto ilícito y un determinado daño existirá relación causal si el primero engendra al segundo y éste no puede darse sin aquél”* (Corte Suprema, 16 de octubre de 1954, RDJ, t. LI, sec. 1ª, p. 488).

En la especie no existen dudas respecto de cuál es el hecho dañoso, que como ya se ha establecido corresponde al actuar ilegal y arbitrario de los agentes del Estado en tiempos de la Dictadura Militar, contra el cónyuge de doña Maaly Mercedes Espinoza Aguilera y padre de doña Claudia Ivana Cartes Espinoza. No obstante lo anterior, lo que los demandantes no logran establecer con claridad, es que efectivamente existan daños que justifiquen la procedencia de la indemnización solicitada, en el caso de la cónyuge e hija de la víctima directa; ni el nexo causal entre la detención y estos presuntos daños.

Así las cosas, no habiéndose rendido prueba suficiente para formar la convicción respecto de la existencia de daños en las demandantes por repercusión, y en conformidad a lo dispuesto en el artículo 1698 del Código Civil, se rechazará la demanda respecto de todos los demandantes.

**VIGÉSIMO TERCERO:** Que, se omitirá pronunciamiento respecto del resto de defensas del demandado.

**VIGÉSIMO CUARTO:** Que, en cuanto al resto de documentos, individualizados más no analizados en particular, en nada alteran lo resuelto por este tribunal, por lo que se omitirá pronunciamiento al respecto.

En cuanto a los informes psicológicos elaborados por doña Massiel Cerna Cuevas, en consideración a que emanan de una persona que no compareció en el juicio, se le restará valor probatorio. Que, en nada altera lo resuelto, la declaración jurada suscrita ante Notario, toda vez que el artículo 1700 del Código Civil dispone: *“El instrumento público hace plena fe en cuanto al hecho de haberse otorgado y su fecha, pero no en cuanto a la verdad de las declaraciones que en él hayan hecho los interesados. En esta parte no hace plena fe sino contra los declarantes”*.



Foja: 1

En cuanto a la jurisprudencia acompañada, cabe resaltar que el artículo 3 del Código Civil dispone: *“Sólo toca al legislador explicar o interpretar la ley de un modo generalmente obligatorio.*

*Las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las causas en que actualmente se pronunciaren”.*

**VIGÉSIMO QUINTO:** Que, no se condenará en costas a los demandantes, por existir motivo plausible para litigar.

**Y, VISTO ADEMÁS** lo dispuesto en los artículos 5° y siguientes y 38° de la Constitución Política de la República; artículos 2332, 2515 y 2497 del Código Civil Chileno; artículo 4° de la Ley N° 19.653 de Bases Generales de la Administración del Estado; Ley N° 19.123, 19.980, 19.992 y 20.874; artículo 3 común de los Convenios de Ginebra; artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículos 27° y siguientes de la Convención de Viena; artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos; y artículos 139, 144, 160, 170, 342, 346, 358, 384, 426 y 428 del Código de Procedimiento Civil, SE RESUELVE:

**I.-** Que se ACOGE la excepción de cosa juzgada respecto del demandante don Segundo Omar Cartes Suazo, RECHAZÁNDOSE respecto de demandantes Maaly Espinoza Aguilera y Claudia Cartes Espinoza.

**II.-** Que se RECHAZA la excepción de falta de legitimidad activa.

**III.-** Que se RECHAZA la improcedencia de las indemnizaciones demandadas por las demandante doña Maaly Mercedes Espinoza y doña Claudia Ivana Cartes Espinoza, por limitación de la justicia transicional.

**IV.-** Que se RECHAZA la excepción de reparación satisfactiva o reparación integral, respecto de doña Maaly Mercedes Espinoza y doña Claudia Ivana Cartes Espinoza.

**V.-.** Que se RECHAZA la excepción principal de prescripción de la acción civil de 4 años en virtud de lo dispuesto por el artículo 2332 del Código Civil, respecto de doña Maaly Mercedes Espinoza y doña Claudia Ivana Cartes Espinoza.

**VI.-** Que se RECHAZA la excepción subsidiaria de prescripción de la acción civil de 5 años en virtud de lo dispuesto en el artículo 2515 en relación con el artículo 2514 del Código Civil, respecto de doña Maaly Mercedes Espinoza y doña Claudia Ivana Cartes Espinoza.



C-10462-2022

Foja: 1

**VII.-** Que se RECHAZA la demanda en todas sus partes.

**VIII.-** Que cada parte pagará sus costas.

Notifíquese, regístrese y archívese en su oportunidad.-

C-10462-2022.

**DICTADA POR DOÑA GABRIELA SILVA HERRERA, JUEZ TITULAR.**

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, veinticinco de Enero de dos mil veinticuatro**



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: MXTXLGRXKL

